

Políticas Públicas

HORIZONTES LATINO · AMERICANOS

VOL 1 · N° 2/3
2020 · AGOSTO

Publicación del Grupo de Investigación en Políticas Públicas Comparadas - ALACIP
Publicação do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas Comparadas - ALACIP

Artículos/ *Artigos*
Reseñas/ *Recensões*
Convocatorias/ *Chamadas*
Investigaciones / *Pesquisas*
Eventos

Investigación en
políticas públicas
desde
América Latina

*Pesquisa em
políticas públicas
desde
América Latina*



Grupo de Investigación en Políticas Públicas
Comparadas - ALACIP |
Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas
Comparadas- ALACIP

Coordinación | Coordenação (2019-2021)

André-Noël Roth Deubel
(UNAL-Colombia)

Ludmila Antunes
(Universidade Federal Fluminenses-Brasil)

Nelson Dionel Cardozo
(Universidad Argentina de la Empresa/
Universidad de Buenos Aires-Argentina)

Nicolás Bentancur
(Universidad de la República-Uruguay)

Staff

Director | Diretor
Nelson Dionel Cardozo

Secretaria de Redacción | Secretária de Redação
Guillermina Curti

**Asesor de redacción en portugués | Assessor de
Redação em português**
Flávio Contrera

Diseño Editorial | Desenho Editorial
José Sat | jose_sat94@hotmail.com

Consejo de Redacción | Conselho de Redação

Ángel María Manrique Linares
(Universidad Católica de Santa María- Perú)

André-Noël Roth Deubel
(UNAL-Colombia)

Cristina Díaz
(Universidad Nacional de Rosario/
Universidad Nacional de Entre Ríos-Argentina)

Filipe Telles
(Universidade de Aveiro- Portugal)

Francisco Rodríguez Escobedo
(Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla-México)

Hemerson Luiz Pase
(Universidade Federal do Rio Grande-Brasil)

José Manuel Canales Aliende
(Universidad de Alicante- España)

José del Tronco
(FLACSO-México)

Ludmila Antunes
(Universidade Federal Fluminenses-Brasil)

Nicolás Bentancur
(Universidad de la República-Uruguay)

Rossana Castiglioni
(Universidad Diego Portales- Chile)

Grupo de Investigación en Políticas Públicas
Comparadas - ALACIP
Avenida Independencia 1259 - 10° C
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Email: gippc.alacip@gmail.com

ISSN 2683-8850

Políticas Públicas

HORIZONTES LATINOAMERICANOS

Políticas Públicas. Horizontes Latinoamericanos es una publicación del Grupo de Investigación en Políticas Públicas Comparadas de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Es de carácter cuatrimestral y de distribución gratuita y tiene como objetivo la divulgación de la producción científica y académica en el área de políticas públicas comparadas en la región.

El editor no se responsabiliza por los conceptos, opiniones y afirmaciones vertidas en los artículos de los colaboradores de la publicación, que son exclusiva responsabilidad de los autores.

Políticas Públicas. Horizontes Latinoamericanos é uma publicação do Grupo de Pesquisa em Políticas Políticas Comparadas da Associação Latino-Americana de Ciência Política (ALACIP). É publicada quadrimestralmente e distribuída gratuitamente. Seu objetivo é divulgar a produção científica e acadêmica na área de políticas públicas comparadas na região.

O editor não é responsável pelos conceitos, opiniões e declarações feitas nos artigos dos colaboradores da publicação, que são de responsabilidade exclusiva dos autores.

GIPPC
Grupo de Investigación en
Políticas Públicas Comparadas
ALACIP

alacip
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA | CIENCIA POLÍTICA

INDICE

2 PALABRAS DEL DIRECTOR | PALAVRAS DO DIRETOR

3 NOVEDADES | NOVIDADES

5 CONVOCATORIAS | CHAMADAS

ARTÍCULOS | ARTIGOS

9 Política pública y polity
Política pública e polity
Rodolfo Canto Sáenz

14 Análisis del “Plan estratégico agroalimentario y agroindustrial participativo y federal 2010-2016” en Argentina a poco más de 3 años de su finalización

Análise do "Plano Estratégico Participativo e Federal Agroalimentar e Agroindustrial 2010-2016" na Argentina pouco mais de 3 anos após a sua finalização

José Daniel Carabajal

18 Capacidad Estatal: dosis y instrucciones de uso
Capacidade estatal: dose e instruções de utilização
André Marengo & Lidia Ten Cate

23 Proteção social no Brasil e Argentina: governos conservadores e os desafios atuais diante da pandemia

La protección social en Brasil y Argentina: los gobiernos conservadores y los desafíos actuales ante la pandemia

Luciana Pazini Papi & Lígia Mori Madeira

RESEÑAS | RESENHAS

37 Public management as a design-oriented professional discipline
| Michael Barzelay *Por Agustina Pratti*

38 Handbook of Research Methods and Applications in Comparative Policy Analysis | Guy Peters & Guillaume Fontaine (editores)
Por Tania Zabala-Peñafiel

39 Políticas Públicas. Questões teórico-metodológica emergentes | Luciana Leite Lima & Leticia Marfa (organizadoras) *Por Pablo Navarro Urquiza*

40 INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES | INSTRUÇÕES PARA AUTORES

44 AGENDA

PALABRAS DEL DIRECTOR

Palavras do diretor

Estamos presentando el segundo número de Políticas Públicas. Horizontes Latinoamericanos, la publicación cuatrimestral del Grupo de Investigación en Políticas Públicas Comparadas (GIPPC) de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). A finales de 2019 cerrábamos la década dando a luz a esta revista con mucha expectativa y emoción. No tenemos más que palabras de agradecimiento a todos los colegas de todas partes de América Latina y otras latitudes que nos enviaron sus felicitaciones y al mismo tiempo compartieron este humilde producto con sus redes y equipos de trabajo.

El 2020 se inaugura con una de las mayores encrucijadas de esta era. Un fenómeno multidimensional, complejo y poliédrico sacude a casi todos los países del globo: la pandemia desatada por el coronavirus/COVID-19. No solo es un acontecimiento epidemiológico, sino que también ha repercutido en la vida política, económica, social y cultural en todo el orbe. Es un evento de consecuencias enormemente negativas para la población, pero al mismo tiempo un catalizador de procesos de cambio que estaban desarrollándose en nuestras sociedades. El confinamiento ha empujado a la humanidad a buscar soluciones a nuevos y viejos problemas: la educación a distancia, el teletrabajo, el gobierno digital, son ahora parte de la realidad cotidiana que hasta hace poco asomaba tímidamente. Pero sin embargo, cuestiones de siempre, como la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la falta de oportunidades o el desencanto por los gobiernos se han recrudecido. Al mismo tiempo es un momento de gran incertidumbre y enormes desafíos para el régimen político: a las democracias "fatigadas" se le adiciona esta enorme crisis, exigiendo a los líderes y a las administraciones públicas una capacidad de respuesta, movilización de recursos y efectividad adicional. La legitimidad de las instituciones, la cohesión social y el desarrollo sustentable parece estar experimentando un estrepitoso cimbronazo.

En este contexto, plagado de interrogantes es donde nos situamos ahora. Nos permitimos ser optimistas porque a la suspensión de los eventos presenciales, se le opuso una vigorosa "teleacademia" en la que a través de la conectividad y el streaming, nos hace sentir de alguna manera más cerca que antes, pero desde nuestras casas. La celeridad con que se ha avanzado en la virtualización de la vida universitaria, la investigación, la celebración de conferencias por medios digitales parece habernos fortalecido como comunidad. Es en este incierto escenario donde llega el segundo número de esta publicación. Para esta edición contamos con cuatro artículos de diferentes partes de la región. Rodolfo Cantó Sáenz de México nos trae una reflexión sobre la importancia de la polity como espacio para elaborar una teoría de las políticas públicas en América Latina; mientras que José Carabajal de Argentina realiza un pormenorizado estudio de caso sobre el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal durante la década pasada en ese país. Desde Brasil este número cuenta con dos contribuciones: Por un lado, André Marengo y Lidia Ten Cate, realizan una discusión teórica y empírica sobre el concepto de "capacidad estatal". Por otro lado, Luciana Pazini Papi y Lígia Mori Madeira nos llevan en un recorrido por la protección social en Brasil y Argentina de las últimas décadas poniéndonos de cara a los desafíos actuales.

Una vez más, esperamos que estas páginas nos sirvan de punto de encuentro entre los académicos, profesores, estudiantes y analistas de las políticas públicas, compartiendo los eventos, novedades, agenda y publicaciones recientes. A escasos meses del primer número, pero en un escenario radicalmente diferente al de fines de 2019, les dejamos la invitación a leer esta segunda versión.

Estamos apresentando o segundo número da Políticas Públicas. Horizontes Latino-americanos, a publicação quadrimestral do Grupos de Pesquisa em Políticas Públicas Comparadas (GIPPC) da Associação Latino-Americana de Ciência Política (ALACIP). No final de 2019, encerramos a década dando à luz esta revista com muita expectativa e emoção. Não temos mais do que palavras de agradecimento a todos os colegas de todas as partes da América Latina e outras latitudes que nos enviaram as suas saudações e, ao mesmo tempo, compartilharam este humilde produto com as suas redes e equipes de trabalho.

2020 abre-se com uma das maiores encruzilhadas desta era. Um fenômeno multidimensional, complexo e poliédrico está abalando quase todos os países do mundo: a pandemia desencadeada pelo coronavírus/COVID-19. Não é apenas um acontecimento epidemiológico, mas também teve repercussões na vida política, econômica, social e cultural em todo o mundo. É um acontecimento de consequências enormemente negativas para a população, mas ao mesmo tempo um catalisador dos processos de mudança que estavam ocorrendo nas nossas sociedades. O confinamento levou a humanidade a procurar soluções para novos e velhos problemas: ensino à distância, teletrabalho, governo digital, fazem agora parte da realidade cotidiana que até há pouco tempo aparecia timidamente. No entanto, questões antigas como a pobreza, a desigualdade, o desemprego, a falta de oportunidades e o desencanto com os governos têm sido exacerbadas. Ao mesmo tempo, é um momento de grande incerteza e enormes desafios para o regime político: às democracias "fatigadas" junta-se esta enorme crise, exigindo dos líderes e administrações públicas uma capacidade de resposta, mobilização de recursos e eficácia adicional. A legitimidade das instituições, a coesão social e o desenvolvimento sustentável parecem estar experimentando um estrondoso choque.

É neste contexto, cheio de perguntas, que nos encontramos agora. Permitimo-nos ser otimistas porque ao cancelamento dos eventos presenciais se contrapôs uma vigorosa "teleacademia" na qual, através da conectividade e do streaming, nos sentimos de alguma forma mais próximos do que antes, mesmo quando ficamos em nossas casas. A rapidez com que foram feitos progressos na virtualização da vida universitária, da pesquisa e da realização de conferências por meios digitais parece ter-nos fortalecido como comunidade. É neste cenário incerto que chega o segundo número da revista. Para esta edição temos quatro artigos de diferentes partes da região. Rodolfo Cantó Sáenz do México nos traz uma reflexão sobre a importância da polity como um espaço para elaborar uma teoria das políticas públicas na América Latina; enquanto José Carabajal da Argentina faz um estudo de caso detalhado sobre o Plano Estratégico Participativo e Federal Agroalimentar e Agroindustrial durante a última década naquele país. Foram recebidas duas contribuições do Brasil: Por um lado, André Marengo e Lidia Ten Cate, levam uma discussão teórica e empírica sobre o conceito de "capacidade estatal". Por outro lado, Luciana Pazini Papi e Lígia Mori Madeira fazem um percurso através da proteção social no Brasil e na Argentina nas últimas décadas, face aos atuais desafios.

Mais uma vez, esperamos que estas páginas sirvam de ponto de encontro para acadêmicos, professores, estudantes e analistas das políticas públicas, compartilhando eventos, notícias, agenda e publicações recentes. A poucos meses da primeira edição, mas num cenário radicalmente diferente ao de finais de 2019, deixamos para vocês o convite para ler esta segunda versão.



Nelson Cardozo
Director | Diretor

Andre-Noël Roth en Ciclo de Diálogos de Políticas Públicas en pandemia: "La idea de prevención se perdió en el Estado"

Andre-Noël Roth no Ciclo de Diálogos de Políticas Públicas sobre Pandemias: "A idéia de prevenção se perdeu no Estado"

María Pía Martín, Directora Académica del Magíster en Gestión y Políticas Públicas (MGPP) de la Universidad de Chile, conversó con el profesor **Andre-Noël Roth** sobre la crisis COVID-19 y el fracaso de la Nueva Gestión Pública.

"La idea de prevención se perdió en el Estado de las naciones latinoamericanas", afirmó Andre-Noël Roth, Doctor en Ciencias Económicas y Sociales de la Université de Genève, Suiza, y Profesor Titular de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, en el **Ciclo de Diálogos de Políticas Públicas del MGPP**.

Durante la actividad, el académico y politólogo suizo profundizó sobre el cambio de paradigma que muchos estados latinoamericanos vivieron luego de la Segunda Guerra Mundial: "En ese tiempo, hubo una construcción del Estado y de la Salud Pública desde la gestión de los profesionales del rubro. Surge la idea del Estado capaz de proveer servicios", sostuvo ante una audiencia de 160 asistentes (promedio), de distintos países.

Más adelante agregó: "La manera en que este Estado se construyó también generó una gran burocracia que tuvo como consecuencia una hipertrofia del aparato estatal, con mucha ineficacia e ineficiencia. Desde este lugar se construyó una contra-idea de que había que recortar los servicios del Estado".

Roth explicó que las consecuencias de la actual pandemia en América Latina son una demostración de que la capacidad de previsión del Estado ha disminuido. "Los estados latinoamericanos actúan cuando las cosas ocurren en el momento y no son capaces de prever. Y eso que tuvimos un poco de suerte en América Latina porque se podía ver la crisis del coronavirus con dos meses de anticipación", indicó. El académico también profundizó en la transición a la privatización del sistema de salud pública de los estados latinoamericanos, así como en su precarización. Por último, respondió parte de las 97 preguntas y comentarios de los asistentes.

El ciclo de "Diálogos en Políticas Públicas en pandemia" es organizado por el Magíster en Gestión y Políticas Públicas (MGPP) y tiene por objetivo reflexionar sobre las bases en la que se sustentan la creación de políticas públicas en Chile.



Andre-Noël Roth



María Pía Martín

María Pía Martín, Diretora acadêmica do Mestrado em Gestão e Políticas Públicas (MGPP) da Universidade do Chile, conversou com o Professor **Andre-Noël Roth** sobre a crise da COVID-19 e o fracasso da Nova Gestão Pública.

"A idéia de prevenção se perdeu no Estado das nações latino-americanas", disse Andre-Noël Roth, PhD em Ciências Econômicas e Sociais da Universidade de Genève, Suíça, e Professor da Faculdade de Direito, Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional da Colômbia, na **Ciclo de Diálogos de Políticas Públicas do MGPP**.

Durante a atividade, o cientista político e acadêmico suíço aprofundou a mudança de paradigma que muitos estados latino-americanos experimentaram após a Segunda Guerra Mundial: "Naquela época, houve uma construção do Estado e da Saúde Pública a partir da gestão de profissionais da área. A idéia de um Estado capaz de fornecer serviços surgiu", disse ele a um público de 160 pessoas (em média) de diferentes países.

Ele adicionou mais tarde: "A forma como este Estado foi construído também gerou uma grande burocracia que resultou em uma hipertrofia do aparelho estatal, com muita ineficiência e ineficácia. A partir deste lugar foi construída uma contra-ideia que os serviços do Estado tiveram que ser cortados".

Roth explicou que as conseqüências da atual pandemia na América Latina são uma demonstração de que a capacidade de previsão do Estado diminuiu.

"Os estados latino-americanos agem quando as coisas acontecem no local e não são capazes de prever". E tivemos um pouco de sorte na América Latina porque você pode ver a crise do coronavírus dois meses antes do tempo", disse ele.

O acadêmico também falou da transição para a privatização dos sistemas de saúde pública nos estados latino-americanos, bem como de sua precariedade. Finalmente, ele respondeu a algumas das 97 perguntas e comentários da audiência.

O ciclo de "Diálogos sobre Políticas Públicas em uma Pandemia" é organizado pelo Mestrado em Gestão e Políticas Públicas (MGPP) e visa refletir sobre as bases nas quais se baseia a criação de políticas públicas no Chile.

Conferencia ¿Coproducción de políticas con los pueblos indígenas en el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA)?

Conferência: Co-produção de políticas com os povos indígenas no Sistema Nacional de Inovação Agrícola (SNIA)?

Martha Isabel Gómez Lee, investigadora del *Grupo de Políticas Públicas Comparadas ALACIP (GIPPC)*, presentó el 10 de junio de 2020 en un seminario de investigación organizado por el GIPPC, el *Instituto Iberoamericano de Berlín (IAI)* y la *Universidad Externado de Colombia*, la ponencia titulada: **¿Coproducción de políticas con los pueblos indígenas en el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) en Colombia?** La autora trabaja en el *Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE)* de la *Universidad Externado* y es becaria para una investigación postdoctoral en el IAI de Berlín.

En este seminario de investigación participaron representantes de la *Organización Indígena de Colombia (ONIC)*, académicos que trabajan en Alemania, Canadá, Argentina y Colombia, actores públicos del *Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural* y del *Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible* de Colombia, estudiantes y ciudadanos. El objetivo fue determinar, desde el enfoque teórico de la coproducción de políticas ¿Cómo ha sido la forma de interactuar entre el Estado y los pueblos indígenas en Colombia en la implementación del SNIA respecto a las políticas de acceso a los recursos genéticos desde 2017 hasta 2020?

Los avances preliminares de la investigación señalan que: 1) El SNIA es una arena política en la que compiten ganadores y perdedores con visiones divergentes sobre el significado de la naturaleza y del desarrollo. Es así como en su seno, el enfoque biocultural de los pueblos indígenas cuestiona la noción de la naturaleza como un mero objeto de control y explotación, y resiste la separación entre el hombre como el sujeto y la naturaleza como el objeto, anclado en la concepción del siglo XVII de materialismo mecánico, que es el enfoque que ha guiado las políticas gubernamentales. 2) El gobierno colombiano y el indígena no coinciden en la legitimación de las instancias en las que se podría presentar una coproducción de políticas con innovación participativa y democrática. Por una parte, las demandas sociales de los pueblos indígenas de consulta previa y Consentimiento Previo e Informado en salvaguarda de sus derechos afectados se deciden en la *Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas (MPC)* y por el contrario en el Consejo Superior del SNIA se decide sobre la asesoría al *Ministerio de Agricultura*. La pregunta de fondo es ¿Cómo el Estado podría avanzar hacia la práctica de elaboración de políticas inclusivas que también incorporen a las minorías étnicas? Hay que romper con la perspectiva tradicional de elaboración de las políticas y trabajar en la nueva agenda de investigación de políticas públicas en y desde América Latina.

Martha Isabel Gómez Lee, pesquisadora do *Grupo de Políticas Públicas Comparadas ALACIP (GIPPC)*, apresentou em 10 de junho de 2020 em um seminário de pesquisa organizado pelo GIPPC, *Instituto Ibero-Americano de Berlim (IAI)* e a *Universidade Externado da Colômbia*, o trabalho intitulado: **Coprodução de políticas com os povos indígenas no Sistema Nacional de Inovação Agrícola na Colômbia?** A autora trabalha no *Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE)* e é pesquisadora de pós-doutorando no IAI em Berlim.

Este seminário de pesquisa contou com a participação de representantes da *Organização Indígena da Colômbia (ONIC)*, acadêmicos que trabalham na Alemanha, Canadá, Argentina e Colômbia, atores públicos do *Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural e do Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável* da Colômbia, estudantes e cidadãos. O objetivo era determinar, a partir da abordagem teórica da co-produção de políticas, como o Estado e os povos indígenas da Colômbia interagiram na implementação do SNIA no que diz respeito às políticas de acesso aos recursos genéticos de 2017 a 2020?

Os avanços preliminares na pesquisa indicam que: 1) O SNIA são uma arena política na qual vencedores e perdedores com visões divergentes sobre o significado da natureza e do desenvolvimento competem. Assim, dentro dela, a abordagem biocultural dos povos indígenas questiona a noção de natureza como mero objeto de controle e exploração, e resiste à separação

entre o homem como sujeito e a natureza como objeto, ancorada na concepção do materialismo mecânico do século XVII, que é a abordagem que tem guiado as políticas governamentais. (2) O governo colombiano e os povos indígenas não concordam sobre a legitimidade das instâncias em que uma co-produção de políticas com inovação participativa e democrática poderia ser apresentada. Por um lado, as demandas sociais dos povos indígenas para consulta prévia e consentimento prévio e informado para salvaguardar seus direitos afetados são decididas pela *Mesa Redonda Permanente dos Povos Indígenas (MPC)*, enquanto por outro lado o Conselho Superior da SNIA decide no espaço do Ministério da Agricultura. A questão básica é como o Estado poderia avançar para a prática de desenvolver políticas inclusivas que também incorporem as minorias étnicas. Devemos romper com a perspectiva tradicional da elaboração de políticas e trabalhar na nova agenda de pesquisa de políticas públicas na e a partir da América Latina.

A.1 Problema SNIA en Colombia ¿RRI del Acuerdo de Paz o transferencia de política?

El concepto de sistemas de innovación en el sector agropecuario según el Banco Mundial (2008) reconoce que:

1. Hay un papel importante para un amplio espectro de actores fuera del Gobierno.
2. La importancia relativa de los actores cambia a lo largo del proceso de innovación.
3. A medida que las circunstancias cambian y los actores aprenden, sus roles pueden cambiar, y
4. Los actores pueden jugar múltiples papeles (por ejemplo, en diferentes momentos pueden ser fuentes de conocimiento, buscadores de conocimiento y coordinadores de enlaces, entre otros).



Martha Isabel Gómez Lee

Aura Cortés

COVID-19 Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Durante el mes de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 como una emergencia de salud pública de preocupación internacional y algunas semanas más tarde el 11 de marzo la caracterizó como una pandemia a nivel mundial. Desde entonces se ha planteado para todos los países del mundo, y en particular para el sector público y sus sistemas de salud un gran desafío. La propagación y el impacto del virus ha afectado a todos los ámbitos y sectores de la sociedad, ante ello, el sector público que incluye tanto a la administración pública como el servicio que dan las instituciones públicas encargadas del sector salud, ha generado un conjunto de estrategias, políticas y programas dirigidas a reducir el impacto de la crisis. Si bien estas políticas y programas parecieran ser divergentes, hay también esfuerzos por establecer mejores instrumentos de coordinación y fortalecimiento de capacidades institucionales.

A raíz de estos acontecimientos, la Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública (REMAP), invitan a enviar artículos de investigación y ensayos con el tema del COVID y la Administración Pública. Se aceptan contribuciones enfocadas al papel de la administración pública en el contexto del brote del COVID-19, en México y en el mundo.

Algunos de los temas que se pueden considerar sin que se limiten solo a estos, incluyen los siguientes:

- Análisis comparativo de la gestión pública frente a la pandemia.
- Estudio y análisis de políticas y programas en contextos nacionales, subnacionales e internacionales.
- Gestión de crisis y liderazgo.
- El papel de la burocracia internacional en la respuesta a la pandemia.
- El impacto y funcionamiento de las organizaciones del sector salud en la gestión de la emergencia (hospitales, clínicas, laboratorios).
- El papel del servicio público y las políticas que lo afectan durante la crisis.
- Gobernanza y sistemas de salud.
- Transferencia de políticas públicas y aprendizaje institucional

Fecha límite para el envío de los artículos:

30 de agosto del 2020. Los trabajos serán enviados por correo electrónico a los editores:

- Jorge E. Culebro M. (jorgeculebrom@gmail.com)
- Benjamín Méndez (bmendezb@hotmail.com)

Con copia a remap.revista@gmail.com

Coordinadores del Dossier:

Jorge E. Culebro Moreno. (UAM-C)
Benjamín Méndez Bahena. (IPN.CIECAS)
Diana Vicher (FCPyS. UNAM)

INTERNATIONAL PUBLIC POLICY ASSOCIATION PRESENTS

30TH JUNE
→ 2ND JULY
2021

BARCELONA



TIMELINE OF THE CONFERENCE

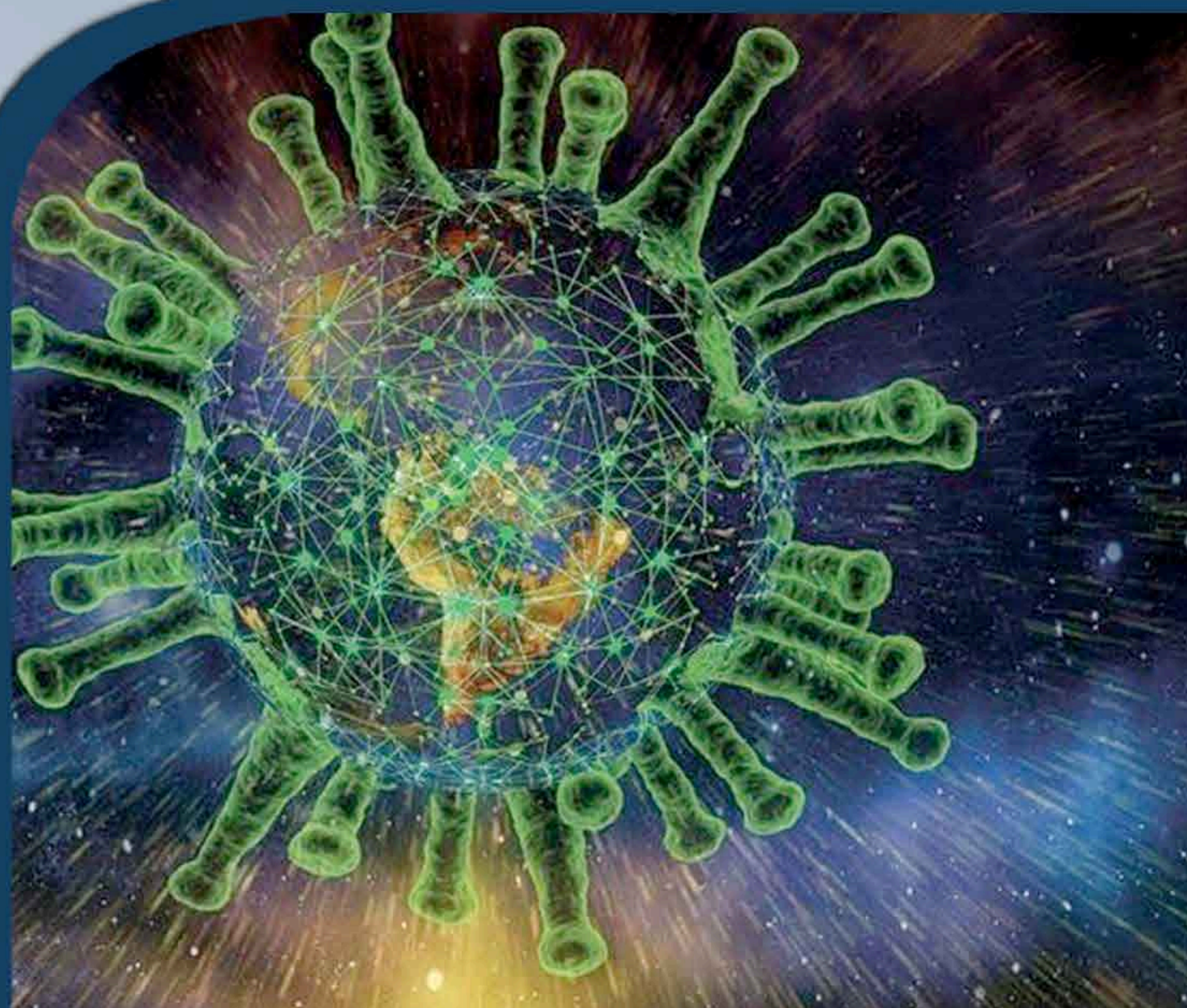
CALL FOR PANELS | 1st September 2020 → 26th October 2020

CALL FOR PAPERS | 16th November 2020 → 29th January 2021

PRECONFERENCE | 29th June 2021



www.ippapublicpolicy.org



CALL FOR PAPERS

**LA PANDEMIA
Y EL ROL DE LAS
CIENCIAS SOCIALES**

Iberoamérica social: Revista-red de estudios sociales
Año 8, Núm. XV

Recepción de artículos
hasta el 15 de octubre



II CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Desafíos de la Administración pública en un tiempo de cambios disruptivos

13 A 16 DE OCTUBRE

(MODALIDAD VIRTUAL)

El II Congreso Nacional de Estudios de Administración Pública de la AAEAP se propone consolidar un espacio para facilitar la exposición, el intercambio y el debate de experiencias originadas en la gestión pública en los distintos poderes del estado de todos los niveles de gobierno, así como estudios, aprendizajes y reflexiones producidas en universidades, asociaciones profesionales, equipos de gestión y entidades de la sociedad civil con interés en los asuntos públicos.

Existirán tres modalidades abiertas de participación asincrónica:

- presentación de **ponencias**
- presentación de **sesiones en panel**
- presentación de **libros o revistas**

Las modalidades de participación sincrónica en los días del congreso incluyen:

- **conferencias** a cargo de expertos del país y del exterior
- **sesiones** en panel institucionales, organizadas por la AAEAP y entidades auspiciantes.
- **conversatorios** con expositores de las sesiones en panel

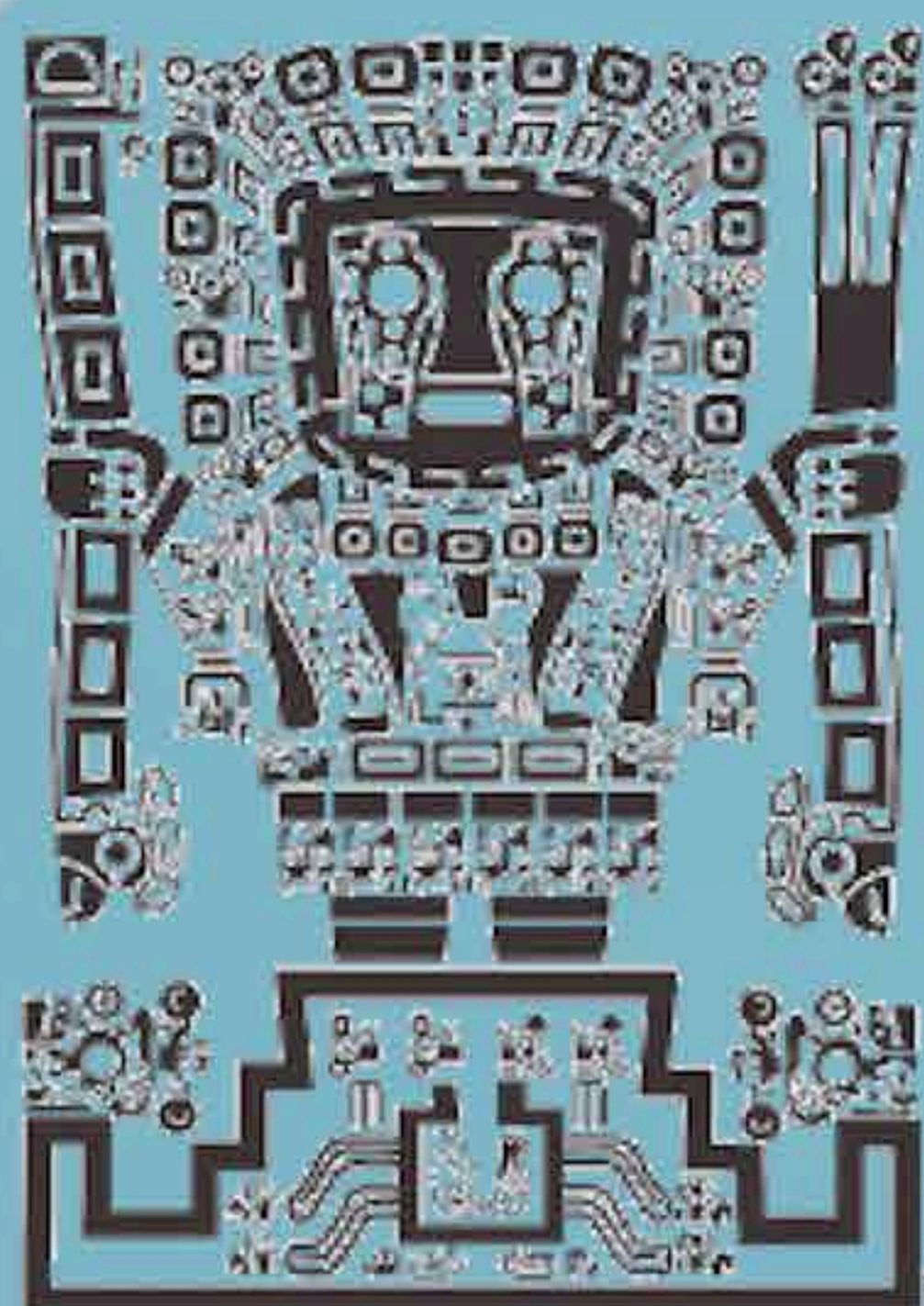
A todas/os las/os inscriptos/as en el congreso se les extenderá el certificado según su participación como COORDINADOR/A-EXPOSITOR/A, EXPOSITOR/A, ASISTENTE, MODERADOR/A y AUTOR/A DE PONENCIA (si es en co-autoría, la certificación es para los que se hayan registrado en el Congreso).

Fechas Importantes:

- 14 de agosto: Recepción de resúmenes de ponencias, propuestas de sesiones en panel y de presentación de libros y revistas.
- 19 de agosto: Aceptación provisional de ponencias, sesiones en panel y de presentación de libros y revistas.
- 26 de agosto a 22 de septiembre: videograbación de sesiones en panel y de presentación de libros y revistas.
- 05 de octubre: Recepción de Ponencias.

Para más información e inscripción dirigirse a:

<https://aaeap.org.ar/congresos/ii-congreso-nacional-de-estudios-de-administracion-publica/#1593812335947-585054c9-13a3>



MARLAS

Middle Atlantic Review of Latin American Studies

Since 1987

CONVOCATORIA DE ARTICULOS MARLAS (Middle Atlantic Review of Latin American Studies)

invita a presentar artículos de investigación, ensayos y notas de investigación sobre la pandemia de coronavirus en América Latina
inglés, español o portugués

fecha límite: 1 de septiembre de 2020

Número especial: Conmociones políticas, sociales y culturales en la era de COVID-19 en América Latina

La pandemia del nuevo coronavirus, además de la tragedia humana que acarrea, pone de relieve grandes desigualdades, como ingresos dispares, acceso diferencial a la salud y la educación y procesos políticos ineficaces. En mayo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró a América Latina el epicentro de la pandemia mundial. Las tasas de nuevos contagios siguen en aumento y se teme una profunda recesión que podría arrojar a millones de personas a la pobreza.

Como nuestro reciente número de junio reveló en la sección sobre la pandemia, cuando el tejido social y la estabilidad política de América Latina están en peligro, se vuelve apremiante contar con estudios que proporcionen una profunda comprensión de los vínculos entre la grave crisis de salud y los problemas sociales, económicos, políticos y culturales.

Este número especial de MARLAS—que se publicará el 31 de octubre—espera contribuciones de las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Consideraremos artículos basados en rigurosos acercamientos teóricos y metodológicos que se centren en las consecuencias de la pandemia COVID-19 en los países de América Latina. Los temas de interés incluyen, pero no se limitan a:

- impactos en la salud, las instituciones estatales y los procesos de gobernanza
- intersecciones de las prácticas tradicionales con la medicina moderna, la política y el capitalismo
- enfrentamientos entre religión y ciencia durante la pandemia
- democracia, libertad de expresión y justicia social
- impactos en la cultura en los sistemas de creencias, la literatura, las artes
- migrantes, fronteras, el Estado-nación y el nacionalismo

Los artículos de investigación (máximo 8.000 palabras) y los ensayos y notas de investigación (máximo 3.000 palabras) deben presentarse utilizando las directrices para el autor que están en la página web de MARLAS en <https://www.marlasjournal.com/> a más tardar el 1 de septiembre de 2020.

Pueden anotar en la sección COVER LETTER de la primera página de envío que el texto es para el número especial. Aquí el enlace para el envío de trabajos: <https://www.marlasjournal.com/about/submissions/>

Para más información, póngase en contacto con la Editora de MARLAS, Ivani Vassoler-Froelich, ivani.vassoler@gmail.com

CONVOCATORIA PARA TRABALHOS MARLAS (Middle Atlantic Review of Latin American Studies)

convida autores a enviar artigos de pesquisa, ensaios e notas de pesquisa sobre a pandemia do coronavírus na América Latina

Inglês, espanhol ou português

Prazo: 1 de setembro de 2020

Número especial:

Turbulências políticas, sociais e culturais na era COVID-19 na América Latina

A pandemia do novo coronavírus, além da tragédia humana, expõe grandes desigualdades na forma de disparidades de renda, acesso desigual à saúde e educação e processos políticos ineficazes na América Latina. Em maio de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a região o epicentro da pandemia global. Novas taxas de contágio continuam a aumentar, e crescem as preocupações com uma profunda recessão que pode lançar milhões na pobreza.

Como nosso recente número de junho revelou numa seção especial sobre a pandemia, nesta conjuntura crítica, quando o tecido social e a estabilidade política da América Latina estão em jogo, é urgente a necessidade de estudos que forneçam uma compreensão aprofundada dos vínculos entre a grave crise de saúde e as questões sociais, a cultura, governança, regimes políticos e a economia política.

Esta edição especial de MARLAS - a ser publicada em 31 de outubro - está aberta a contribuições das ciências sociais, humanidades e artes. Consideraremos artigos baseados em rigorosas abordagens teóricas e metodológicas, prontas para revisão por pares, que enfoquem nas consequências da pandemia da COVID-19 nos países da América Latina. Os tópicos de interesse incluem, mas não estão limitados a:

- impactos na saúde, instituições estatais e processos de governança
- interseções de práticas tradicionais com medicina moderna, política e capitalismo
- confrontos entre religião e ciência durante a pandemia
- a pandemia e os desafios à democracia, liberdade de expressão e justiça social
- Impactos na cultura, sistemas de crenças, literatura, artes
- imigrantes, fronteiras, Estado-nação e nacionalismo

Artigos de pesquisa (máximo de 8.000 palavras) e ensaios ou notas de pesquisa (máximo de 3.000 palavras) devem ser enviados usando as diretrizes do autor na página de MARLAS na web em <https://www.marlasjournal.com/>, o mais tardar em 1 de setembro de 2020.

Por favor, observar na seção COVER LETTER na primeira página de envio que o texto é para o número especial. Para enviar seu trabalho siga este link: <https://www.marlasjournal.com/about/submissions/>

Para mais informações, entre em contato com a editora de MARLAS, Ivani Vassoler-Froelich, ivani.vassoler@gmail.com

Política pública & polity

Política pública e polity

PALABRAS CLAVE

#Polity
#politics
#política pública
#Constitución

PALAVRAS CHAVE

#Polity
#politics
#política pública
#Constituição

RESUMEN

Este artículo abordará la relación que existe entre la esfera de la polity y la politics. En primer término comprende las estructuras o arreglos institucionales que caracterizan a un sistema político, mientras que el segundo implica la esfera de la política electoral. Este artículo explora el estudio del régimen constitucional o polity para desarrollar una teoría general de la política pública en América Latina. A partir de esta idea abarcaremos el contexto de los conflictos surgidos en los últimos años en países como Chile y otros de la región.

RESUMO


Este artigo abordará a relação entre a esfera da polity e a politics. A primeira compreende as estruturas ou arranjos institucionais que caracterizam um sistema político, enquanto a segunda envolve a esfera da política eleitoral. Este artigo explora o estudo do regime constitucional ou polity para desenvolver uma teoria geral da política pública na América Latina. A partir desta ideia abrangeremos o contexto dos conflitos que surgiram nos últimos anos em países como o Chile e outros na região.



**RODOLFO
CANTO SÁENZ**

Profesor-investigador de la
Facultad de Economía de la
Universidad Autónoma de
Yucatán

Professor - pesquisador na
Faculdade de Economia da
Universidad Autónoma de
Yucatán

 rodolfo.canto@uady.mx

La influencia de la política (politics) en todo el proceso de la política pública, desde el establecimiento de la agenda hasta la evaluación, está bien acreditada en la literatura. El juego cotidiano de intereses entre actores sociales y políticos, todos con diferentes cuotas de poder, define en gran medida los derroteros de la mayoría de las políticas públicas, una realidad que hoy pocos ponen en duda. Sin embargo, con toda su influencia, la política no explica en su totalidad esos derroteros. Las estructuras o arreglos institucionales que caracterizan a un sistema político – su polity, como se les conoce en lengua inglesa – se cuentan entre los determinantes esenciales de la política pública, y la institución de mayor trascendencia en cualquier democracia es su régimen constitucional, constitución política o simplemente constitución, y el entramado institucional que de ella deriva.

La influencia del régimen constitucional o polity se da en un plano distinto a la competencia entre actores por promover sus objetivos en el proceso de la política pública y también al llamado ajuste partidario mutuo (Lindblom, 2007). El modelo pluralista o de grupos de presión, como sabemos, no alcanza a dar cuenta de toda la política pública (Lowi, 2007; Forester, 2007), como tampoco alcanzan a hacerlo las demandas de la sociedad civil organizada y ni aun las demandas de núcleos mayoritarios de la población. Así como no todos los asuntos pueden someterse a consulta popular (como los derechos humanos, por ejemplo), tampoco pueden definirse todas las políticas públicas en el marco de la politics y el ajuste partidario mutuo. En una república democrática ciertos temas de importancia cardinal quedan plasmados en su constitución y no pueden modificarse como resultado del juego cotidiano de intereses entre grupos de presión, por fuertes que estos sean. Aun si algunos intentos de hacerlo llegaran a convertirse en leyes o decretos, corresponde a la instancia superior del Poder Judicial, o Suprema Corte, dictaminar su constitucionalidad.

El análisis del régimen constitucional o polity ofrece amplias posibilidades para el desarrollo de teoría general de la política pública en

América Latina, especialmente en el contexto de los conflictos surgidos en los últimos años en países como Chile y otros de la región. La constitución de un país define los parámetros esenciales en los que se desenvuelve la política pública, por ejemplo, al distribuir las facultades y competencias entre los distintos poderes públicos y los ámbitos del gobierno, al definir la duración de los mandatos de los gobernantes y regular los mecanismos de su elección o al contemplar o no dispositivos de democracia directa al lado de los mecanismos de la democracia representativa, por mencionar algunos temas.

Los imperativos constitucionales fijan parámetros a la naturaleza, contenidos y alcances de las políticas públicas para adecuarlas a los objetivos nacionales plasmados en la propia constitución. Si estos objetivos incluyen, por ejemplo, servicios universales de salud, educación y seguridad social gratuitos para toda la población, los gobiernos estarán legalmente obligados a diseñar e implementar políticas que lleven a la práctica el mandato constitucional, incluida una política fiscal que asegure los medios necesarios para hacerlo.

Las políticas redistributivas de la riqueza y el poder para combatir la pobreza, la desigualdad y las discriminaciones de todo tipo, o para asegurar trabajo y salario dignos, son ejemplos de imperativos constitucionales de corte progresivo que los gobiernos en turno deben cumplir, al margen de sus preferencias ideológicas. Pero la experiencia de algunos países latinoamericanos demuestra que también puede ocurrir lo contrario: que la constitución establezca imperativos de corte regresivo que propicien la desigualdad en vez de combatirla, por ejemplo, al reservar a inversionistas privados la oferta de servicios de salud, educación superior o seguridad social que los ciudadanos deberán comprar en la medida de sus posibilidades. Imperativos constitucionales como estos representarán obstáculos formidables a las políticas redistributivas de la riqueza y el poder. Un buen ejemplo del primer supuesto es la constitución alemana, y un ejemplo del segundo es la constitución chilena, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

El artículo 20 de su constitución define a Alemania como un “estado federal social”. El principio del estado social obliga a los responsables de la política pública en cada nivel de gobierno a proteger el bienestar social de los alemanes, y esta definición tiene implicaciones de fondo. Por ejemplo, luego de la crisis financiera internacional de 2008, el gobierno alemán redujo considerablemente las prestaciones sociales y de desempleo fusionándolas en un solo esquema y, a pesar de las críticas recurrentes, eliminó de la agenda de políticas la cuestión de la idoneidad de los niveles de beneficios. En 2010, la Corte Constitucional de Alemania dictaminó que los nuevos niveles de beneficios no estaban en línea con el texto constitucional y obligó al Legislativo a reponer los anteriores. Su sentencia trajo de vuelta el tema de la idoneidad de los niveles de beneficios a la agenda nacional de políticas públicas (Knill and Tosun, 2012: 43 y 114).

El caso chileno está en el otro extremo. La actual constitución de Chile, promulgada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet, reserva a los individuos la responsabilidad de satisfacer con sus propios medios sus necesidades de salud, educación y seguridad social. Como escribe el analista chileno Jorge Van de Wyngard:

La Constitución de 1980 “define el rol del Estado como subsidiario y se prioriza como eje del desarrollo el ejercicio de la libertad y el consiguiente emprendimiento de las personas. El Estado deja de asumir un rol paternalista y entrega la responsabilidad de proveerse la satisfacción de las necesidades a las propias personas y a su capacidad de esfuerzo, trabajo y superación... Ahora las personas han ido progresivamente entendiendo y asumiendo que la satisfacción de las necesidades de salud, educación, trabajo, seguridad social, desarrollo económico etc., son asuntos que dependen prioritariamente de ellas mismas y que ya no estará siempre el Estado para proveérselas. Es indudable que ese camino ha sido duro para algunos, pero en definitiva ha generado una profunda transformación sociocultural, sobre

todo en las generaciones más jóvenes, que entienden que deben ser capaces por sí mismos de con figurar sus propias existencias, prescindiendo en buena medida del Estado” (Van de Wyngard, 2013; citado en Osorio Rauld, 2019).

En el marco de estas ideas, el sistema de pensiones chileno fue privatizado durante la dictadura, con la excepción de las pensiones de los militares, que se mantuvieron a cargo del Estado; también fueron privatizados amplios sectores de la educación y la salud. Los resultados de las privatizaciones están a la vista: las pensiones administradas por empresas privadas promedian 150 dólares al mes, por completo insuficientes para un retiro digno. La educación superior de calidad requiere de la contratación de créditos que están fuera del alcance de la mayoría de los chilenos y la privatización de los servicios de salud ha dado lugar a una segmentación de los servicios en función de la capacidad de pago de los individuos. Para la mayoría de los trabajadores chilenos, que perciben un salario promedio de unos 650 dólares mensuales, muchos de los servicios de salud que ofrecen las llamadas Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), en manos privadas, sencillamente quedan fuera de su alcance. “Esto genera inequidad inmediatamente, porque diferencia entre los grupos de pacientes que no pueden pagar, los que pueden pagar menos y los que pueden pagar más. La salud, la vida y la muerte dependen del bolsillo” (Bernucci, 2019).

El descontento ciudadano generado por este estado de cosas y acumulado durante décadas, llevó a un estallido social en el mes de octubre de 2019 que se tradujo en el incendio y destrucción de más de la mitad de las estaciones del tren metropolitano de Santiago, disturbios violentos en las principales ciudades del país, enfrentamientos entre manifestantes y la policía que provocaron la muerte de decenas de personas y centenares de heridos y –quizá lo más significativo– la manifestación más grande desde el golpe de estado de 1973 en la capital del país, con la participa-

ción de alrededor de 1.2 millones de ciudadanos, uno de cada cinco habitantes de Santiago. Las dos principales demandas de los chilenos hoy en día son precisamente una nueva constitución, que permita cambiar lo que llaman la herencia neoliberal de la dictadura, y una agenda social urgente que incluye “salario mínimo digno, pensiones básicas decentes, abaratamiento de los medicamentos, acceso oportuno a la salud, condonación de la deuda por créditos universitarios”, entre otras demandas (Anfossi, 2019).

En efecto, para que los ciudadanos chilenos puedan dejar atrás el modelo económico y social heredado de la dictadura y avanzar hacia el modelo europeo de bienestar social un requisito insalvable es cambiar su constitución y, con ella, mucho del entramado institucional del Estado chileno, es decir, su polity. Salud, educación y seguridad social para todos, independientemente de su capacidad de pago, son políticas redistributivas indispensables para asegurar la dignidad humana en el sentido de Lasswell (1951) que requieren el mandato constitucional expreso de formularlas e implementarlas.

Pero la experiencia chilena también demuestra que cambiar una constitución no es en modo alguno una tarea fácil, aun si se intenta al más alto nivel. La presidenta Michelle Bachelet, del Partido Socialista de Chile, trató de hacerlo al final de su mandato, sin éxito. Hubo otros intentos, por lo menos desde una década atrás, pero todos fueron infructuosos (Van de Wingard, 2013). El relevo de una constitución por otra normalmente desborda las posibilidades de las instituciones políticas vigentes, incluidos los partidos políticos que, inmersos en el cotidiano ajuste partidario mutuo, no pueden por sí mismos agendar transformaciones políticas tan radicales, sobre todo cuando implican un pacto social completamente nuevo, como se plantea en el caso chileno. La política tradicional en una democracia tiende a mantenerse en los marcos del incrementalismo (Lindblom), y el cambio constitucional que se plantea en Chile es de tal magnitud que solamente el es-

tallido social de octubre de 2019 pudo hacerlo posible. A la inversa, la constitución de 1980, promulgada para institucionalizar el modelo neoliberal de gobierno, solo se explica por el régimen dictatorial de entonces, que no requirió del consenso democrático para imponerla.

La experiencia chilena deja una lección más. El contraste entre un estado de cosas percibido como profundamente injusto por el grueso de la población y un orden político incapaz de responder a ese estado de cosas con políticas redistributivas de la riqueza y el poder que estuvieran a la altura de las demandas sociales condujo a un creciente distanciamiento entre los ciudadanos chilenos y sus instituciones políticas, incluidos por igual los partidos y los poderes constitucionales. El descontento de la ciudadanía con el funcionamiento del sistema político no fue en modo alguno repentino. Ya en 2016, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reportó un incremento del porcentaje de chilenos que pensaba que la democracia funcionaba mal o muy mal, de 20% en 2012 a 40% en 2016. También, el informe del PNUD daba cuenta de que el porcentaje de chilenos que no se identificaban con ninguna posición política (ni izquierda, ni centro, ni derecha) pasó de 34% en 2008 a 68% en 2016, y el de quienes no se identificaban con ninguno de los partidos políticos existentes pasó de 53% en 2008 a 83% en 2016. El informe del PNUD concluía que Chile enfrentaba en su sistema político un problema estructural desde hacía más de una década (PNUD, 2016; Osorio Rauld, 2019).

Sin embargo, a pesar de la visión crítica que expresaban los chilenos respecto de las élites y las instituciones públicas y privadas, la encuesta del PNUD también mostró un aumento en el interés ciudadano por los asuntos públicos y una visión positiva del futuro de su democracia. La manifestación de 1.2 millones de personas en Santiago, en octubre de 2019, confirma que el distanciamiento entre los chilenos y su sistema político no significaba apatía o desinterés por los asuntos públicos,

sino tan solo un descontento creciente con sus instituciones políticas que condujo al estallido social. La experiencia chilena también refuerza una tesis que tiende a ganar terreno en las ciencias sociales y en el análisis de políticas públicas: la democracia es necesaria pero no suficiente para abatir la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. También es necesaria la movilización de los desfavorecidos para catapultar sus demandas a la agenda pública (Dréze y Sen, 2014; Canto, 2018).

Hasta antes del estallido social de octubre de 2019, el dominio de las élites chilenas permanecía incuestionado, atrincherado en una constitución diseñada para hacer prevalecer sus intereses frente a los de las mayorías chilenas. La democracia, sujeta por esa constitución, poco podía hacer para combatir a fondo la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de los chilenos. La polity neoliberal permitió a las élites diseñar instituciones económicas para enriquecerse y perpetuar su poder a costa de la vasta mayoría de las personas de la sociedad y convirtió a Chile en otro ejemplo de un territorio latinoamericano donde las instituciones extractivas han generado excedentes elevados que se concentraron en la cúspide de la pirámide social (Acemoglu y Robinson, 2014; Vázquez-Barquero y Rodríguez-Cohard, 2016).

En el contexto de una polity neoliberal, los partidos afines a los intereses de las mayorías tampoco podían hacer mucho para cambiar el estado de cosas. Por lo demás, varios de los partidos políticos en Chile apoyaban al statu quo y se identificaban con una democracia funcional a los intereses de los más ricos. Por esto mismo, los partidos políticos compartieron el descrédito de las instituciones políticas antes referido y fueron incluidos en el “que se vayan todos”, exclamado en el estallido social de octubre de 2019 (Osorio Rauld, 2019).

Sin embargo, la organización política de los desfavorecidos es imprescindible para llevar sus demandas a la agenda pública, y el enorme movimiento popular que siguió al estallido social con toda probabilidad requerirá aliarse con partidos afines o en todo caso crear uno nuevo. Los partidos políticos, pese a sus bien conocidos defectos, son necesarios en una democracia (Canto, 2014) y no hay duda de que seguirán desempeñando un papel relevante en la nueva polity que habrá de sustituir a la constitución de 1980.

Los ejemplos de Alemania y Chile confirman el poder de los arreglos institucionales que caracterizan a un sistema político para modelar el proceso de la política pública. No solo el juego cotidiano del poder define quién se queda con qué, cuándo y cómo, o quién se queda fuera. También lo hacen las estructuras institucionales, surgidas de anteriores batallas por el poder. Las reglas que dan cuerpo a las instituciones son resultado de esas batallas. La polity es, a fin de cuentas, poder institucionalizado. Una nueva constitución representa un nuevo pacto social, con cláusulas y compromisos nuevos que normalmente responden a nuevas correlaciones de fuerzas en el seno de la sociedad.

La sociedad chilena avanza por el mejor camino al exigir una nueva constitución, que funde una polity afín a los intereses de las mayorías. Hoy un paréntesis provocado por la pandemia del Covid 19 obliga a posponer por algún tiempo el proceso constituyente, pero una vez superada la contingencia, los chilenos deberán retomarlo con todo su vigor. La constitución de 1980 es el resultado de una histórica batalla perdida por la sociedad chilena: su democracia misma, destruida por el violento golpe de Estado de 1973. El estallido social de octubre fue el inicio de otra batalla histórica, que habrá de ganar el pueblo chileno para enterrar la polity neoliberal, herencia de la dictadura.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acemoglu, D. y Robinson, J. (2016). Por qué fracasan los países. México: Crítica-Paidós.
- Anfossi, A. (7/12/2019). Lucha social en Chile, sin avances. La Jornada. Recuperado de <https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2019/12/07/lucha-social-en-chile-sin-avances-4325.html>
- Bernucci, J. M. (20/11/2019). Secretario General del Colegio Médico de Chile. BBC News. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50405749>
- Canto, R. (2014). Democracia y Políticas Públicas. El contorno de sus relaciones. Perspectivas de Políticas Públicas, No. 6, 13-41.
- Canto, R. (2018). Movilización de los desfavorecidos: condición del desarrollo humano y sostenible. Estudios Políticos, número 45, 83-112.
- Dréze, J. y Sen, A. (2014). Una gloria incierta. India y sus contradicciones. Madrid: Taurus.
- Forester, J. (2007). La racionalidad limitada y la política de salir del paso. En L. F. Aguilar (Comp.), La hechura de las políticas (pp. 315-340). México: Miguel Ángel Porrúa.
- Knill, C. & Tosun, J. (2012). Public policy. A new introduction. London: Palgrave Macmillan.
- Lasswell, H. D. (2007). La orientación hacia las políticas. En L. F. Aguilar (Comp.), El estudio de las políticas públicas (pp. 79-103). México: Miguel Ángel Porrúa.
- Lindblom, C. (2007). La ciencia de “salir del paso”. En L. F. Aguilar (Comp.), La hechura de las políticas (pp. 201-225). México: Miguel Ángel Porrúa.
- Lowi, T. J. (2007). Políticas públicas, estudios de caso y teoría política. En L. F. Aguilar (Comp.), La hechura de las políticas (pp. 89-117). México: Miguel Ángel Porrúa.
- Osorio, N. A. (2019). ¡Que se vayan todos, que no quede uno solo! La crisis institucional en Chile: factores contributivos del socavamiento de las bases culturales de la democracia. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, volumen 18(2), 73-94.
- PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) (2016). IV Encuesta Auditoría a la Democracia. 9 de septiembre de 2016. Recuperado de <https://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/presscenter/pressrelea/es/2016/09/09/pnud-presenta-iv-encuesta-auditor-a-a-la-democracia.html>
- Van de Wyngard, J. (2013). Los aportes fundamentales de la Constitución de 1980 al sistema jurídico-político y social chileno. Derecho Público Iberoamericano, número 2, abril, 277-288.
- Vázquez-Barquero, A. & J. C. Rodríguez-Cohard (2016). Endogenous development and institutions: Challenges for local development initiatives. Government and Policy, volumen 34 (6), 1135-1153.

Análisis del 'Plan estratégico agroalimentario y agroindustrial participativo y federal 2010-2016' en Argentina a poco más de 3 años de su finalización

Análise do 'Plano Estratégico Participativo e Federal Agroalimentar e Agroindustrial 2010-2016' na Argentina pouco mais de 3 anos após a sua finalização

PALABRAS CLAVE

Plan
#Estratégico
#Agroindustrial
#Agroalimentario
#Argentina

PALAVRAS CHAVE

#Plano
#Estratégico
#Agroindustrial
#Agroalimentar
#Argentina

RESUMEN

En el presente artículo se analizará el "PLAN ESTRATEGICO AGROALIMENTARIO Y AGROINDUSTRIAL PARTICIPATIVO Y FEDERAL 2010-2016". Teniendo en cuenta que existen dos versiones del mencionado plan se tomará la última versión, es decir la 2ª versión. El PEA nace como una iniciativa desde el Ministerio de Agricultura, ganadería y pesca de la Nación. Este plan se enmarca dentro de las iniciativas surgidas del acuerdo firmado en septiembre del año 2000 en New York y conocido como Declaración del Milenio. El PEA toma ciertos objetivos de este tratado y los reformula según las necesidades propias de Argentina. El PEA se define como un plan estratégico impulsado por el gobierno y participativo en sentido que se convocará a diferentes sectores agroalimentarios y agroindustriales de Argentina a definir un plan estratégico dentro de los límites establecidos por el PEA y con una metodología de trabajo participativa preestablecida por el ministerio de agricultura ganadería y pesca de la nación.

RESUMO

Este artigo analisará o "PLANO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO E FEDERAL AGROALIMENTAR E AGROINDUSTRIAL 2010-2016". Considerando que existem duas versões do plano mencionado, a versão mais recente será adotada, ou seja, a 2ª versão. A PEA nasceu como uma iniciativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca da Nação. Esse plano faz parte das iniciativas decorrentes do acordo assinado em setembro de 2000 em Nova York e conhecido como Declaração do Milênio. A PEA seleciona certos objetivos deste tratado e os reformula de acordo com as próprias necessidades da Argentina. A PEA é definida como um plano estratégico promovido pelo governo e participativo, no sentido de que diferentes setores agroalimentares e agroindustriais da Argentina serão convocados para definir um plano estratégico dentro dos limites estabelecidos pela PEA e com uma metodologia de trabalho participativa pré-estabelecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca da Nação.



**JOSÉ DANIEL
CARABAJAL**

Licenciado en Ciencia Política
(Universidad Nacional de La Rioja)
Licenciado en Sociología
(Universidad Nacional de Santiago
del Estero) Investigador en Centro
de Investigaciones Jurídicas y
Sociales (CIJS) de la Universidad
Nacional de Córdoba.

Bacharel em Ciência Política
(Universidad Nacional de La Rioja)
Bacharel em Sociologia
(Universidad Nacional de Santiago
del Estero. Pesquisador do Centro
de Investigaciones Jurídicas y
Sociales (CIJS) da Universidad
Nacional de Córdoba.



licenciadojdc@gmail.com

Introducción

La palabra política refiere a esas acciones emprendidas desde el Estado que procuran alcanzar el bien común. Y el hecho de que esas políticas sean públicas está indicando, por oposición, que no se trata de una política dirigida hacia un particular o hacia un grupo reducido, sino que se trata de que la esencia de esa política sea pública. Con estos elementos es posible afirmar que las políticas públicas son acciones que realizan los gobiernos para brindar soluciones y buscar el bien común de amplios sectores de la población sin importar su condición social política o económica (Graglia, 2017; Repetto, 2010; BID, 2006).

En el plan se detallan una serie de procedimientos e instrumentos a ser utilizados por los actores involucrados, entre estos instrumentos se encuentran las definiciones de Misión, Objetivo de Gran Visión., definición de objetivos y metas cuantificables, futuros deseables, matriz F.O.D.A. y toda una amplia batería de herramientas propias del planeamiento de las ciencias empresariales. Con esto se quiere significar también el fuerte sentido comercial y productivo del PEA. Fue un plan pensado para producir ganancias y ampliar la capacidad productiva de las diferentes regiones del país. Se parte de la necesidad de generar un plus productivo con la intención de aprovechar el fuerte excedente agropecuario que registraba el país, en esos años, con el aumento de la exportación de granos.

Procesos y metodología de planificación estratégica

Los procesos y metodología empleada y sugerida por el PEA responden a un esquema tradicional o típico de una planificación estratégica más propia de las ciencias empresariales antes que al conocido esquema de fases de las políticas públicas propio de las ciencias sociales y de la ciencia política.

En concreto la planificación del PEA se desarrolla de acuerdo a dos lógicas que van en paralelo, por un lado, la lógica metodológica, ocho pasos, por otro lado, la lógica participativa, con doce etapas. Ambas lógicas deben desarrollarse en forma simultánea, lo cual

coloca frente a la discusión abierta sobre la conveniencia o no de esta lógica metodológica. Por un lado, están las concepciones a favor del esquema de fases que argumentan que sirve como esquema analítico del proceso de formulación de las políticas públicas. En tal sentido las políticas públicas son vistas como un esquema que permite su simplificación en contextos de complejidad y puede usarse como una guía visual para el análisis de las mismas. En este caso el PEA está destinado a servir de guía a los responsables de su formulación en las distintas provincias donde se implementa y lograr una planificación homogénea.

Por el lado de las concepciones en contra del modelo de fases podemos sintetizarlas en la falta de poder explicativo de las fases con respecto a los procesos políticos y negociaciones entre Estado y grupos de actores involucrados en la problemática que la política pública intenta dar respuesta.

En definitiva como guía para la elaboración de sucesivas versiones del PEA este plan, tiene de positivo el hecho de tener una estructura secuencial y de fases para que los propios participantes puedan entender la metodología, se debe tener presente que en este plan participaron diferentes sectores sociales con diversidad de intereses, por tanto se procuró la uniformidad y cohesión de las diferentes partes mediante un esquema homogéneo y simplificado que garantice la participación de todos los implicados.

El caso de su implementación en la provincia de Santiago del Estero

Los avances en cuanto al PEA en Santiago del Estero fueron exigüos, por lo tanto, se analizaron los resúmenes trabajados por la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

En el instrumento número 2 denominado "Análisis de los Ejes Estratégicos de la Misión del PEA2" se encuentra una matriz de trabajo en la cual se inscriben los ejes estratégicos de la misión, en las otras dos columnas lo que se podría denominar la conformidad, o no, con el eje propuesto y en la última columna, el eje estratégico a ser modificado según la necesidad de cada actor involucrado. En este caso los ejes estratégicos fueron dados por el

Estado a través del ministerio encargado de la implantación a las distintas provincias (en el caso de Santiago del Estero, el Ministerio de la Producción) y los diferentes actores redefinen según sus particulares necesidades y circunstancias de cada caso.

El instrumento 2 tiene 6 ejes estratégicos de la Misión de los cuales se modificó y adaptó la totalidad, quizás en algunos casos no fueron modificaciones ni sustanciales ni importantes, por lo que refieren a una diferente visión de la realidad por parte de los actores implicados.

Para comprender a que se refieren estos ejes estratégicos de la misión se cita una definición de Misión y la utilidad de la misma según el propio PEA

“La Misión es, en este esquema, el punto de partida para el diseño de los objetivos. Es la guía o marco de referencia para orientar las acciones y enlazar lo deseado con lo posible. De aquí la trascendencia que tiene la misión, ya que le da sentido a las distintas políticas, programas y acciones destinadas a transformar lo que tenemos en lo que queremos.” (PEA, 2010: 41)

El instrumento también incorpora al final una sección para introducir otros ejes estratégicos. Hubiera sido interesante si se hubieran introducidos algunos ejes en este campo, tales como el calentamiento global, el uso racional del agua, la producción agrícola en condiciones de sequía, prevención y contención de catástrofes naturales, combate de la desertificación, etcétera.

Concretamente los ejes estratégicos propuestos se centran en cuestiones productivas y de comercialización, y el incremento de la productividad asociada a la unidad regional para favorecer una salida competitiva de la producción de cada región. Una vez trabajado el instrumento debe ser enviado al ministerio que lleva adelante la implementación del PEA, es decir Ministerio de agricultura, ganadería y pesca de la nación, en dicho requerimiento puede percibirse la centralidad del Estado tal como lo planteamos más arriba.

En el caso del instrumento 3 se enuncia los objetivos por cada uno de los 6 ejes estratégicos, con la misma estructura, una matriz con una columna para los objetivos sugeridos, otra columna para marcar la no modificación, la siguiente columna sirva para marcar modificación, y la última columna para anotar las modificaciones al objetivo propuesto. Puede notarse que existen ejes estratégicos que contienen más de 20 objetivos, desde una perspectiva más racional debieran reducirse el número de objetivos a no más de 4 o 5 por eje estratégico para hacer más mensurable y posible el plan, garantizando de este modo el cumplimiento de los objetivos. No obstante, la mayoría de los ejes estratégicos contiene más de 6 objetivos. La variedad de temas que abordan los objetivos es tan amplia como su número, y en algunos casos parecen hasta repetitivos con otros objetivos de otros ejes estratégicos.

En el caso del instrumento 8 se observa una matriz (Matriz de metas) muy compleja de llenar con muchos indicadores, difícil de seguir, se requiere gran cantidad de información para su llenado, es de suponer que se trató de una matriz que debieron llenar los actores individualmente y luego se procedería a la confección de una mega matriz de metas.

Actores involucrados en el PEA

En este caso es posible evidenciar el carácter participativo del plan no se diluye en las mismas instituciones estatales, sino que pretende ser inclusivo de los actores involucrados en la realidad misma de la problemática que pretende resolver, también se ve el carácter solo instrumental del gobierno, pues sus órganos solo actúan facilitando las condiciones de desarrollo del PEA.

“Los actores deben ser vistos, en esta perspectiva, como activamente involucrados en forjar su propio destino, y no simplemente como recipientes pasivos de programas de desarrollo forjados en el lejano escritorio de una organización burocrática estatal.” (PEA, 2010: 12)

En este sentido se debe entender a las políticas públicas como un proceso de negociación e interacción entre el Estado y los diferentes actores sociales, tal como se plantea más arriba. El sentido de este procedimiento sería captar las relaciones de fuerzas y las distribuciones de poder que se delinean en una política pública. Lo que sí es de destacar, haciendo un análisis cuantitativo de los actores, es la fuerte presencia de los actores del "sistema científico tecnológico" con seis (6) actores, lo cual demuestra el carácter científico que se pretende dar a la producción agroindustrial y agroalimentaria, también se puede observar al énfasis social puesto en los actores del "sistema social" contando cinco (5) actores representativos a nivel local.

También es posible advertir el fuerte carácter federal del plan pues se trata de dotar de independencia a las unidades ejecutoras (es decir las provincias) y se intenta que ellas mismas sean las que elaboran el plan de acuerdo a su situación particular en el área productiva agroindustrial y agroalimentaria, según sus posibilidades. Siguiendo con el carácter federal del plan se establecen una serie de consejos federales, los cuales nuclean al conjunto de actores genéricamente mencionados más arriba, cada uno con una función diferenciada, pero con un mismo objetivo rector y una confluencia de resultados. El propio plan define a los consejos federales:

"Los Consejos Federales son espacios destinados a facilitar el juego ordenado de los actores con normas de funcionamiento y relaciones de interacción previamente establecidas. En dichos espacios, se utilizará como mecanismo participativo el trabajo en mesas (subsectoriales, regionales, provinciales y temáticas) en función de las características de cada Consejo. Dichas mesas trabajarán en base a lineamientos estratégicos aportados por el MAGyP." (PEA, 2010: 34)

En este sentido se considera importante la iniciativa de la pluralidad de aportes que puedan hacerse desde estos diferentes consejos, ya

que constituyen una base interdisciplinaria que facilita el mejor tratamiento del problema que se intenta solucionar.

Conclusiones

Es posible concluir de este análisis que el PEA no es más que un manual de recomendaciones o de instrucciones acerca de cómo desarrollar y como llevar adelante. Quizá por su carácter de inconcluso o de pautas para la formulación de un producto final se deba el hecho de las versiones de las cuales estamos analizando su versión 2 y así seguirán apareciendo versiones hasta que se llegue finalmente a la versión definitiva del plan. En cuanto a los instrumentos analizados se estima que no favorecen la participación y la originalidad de los aportes, pues al venir con una guía a ser modificada o ampliada se está condicionando de alguna manera la agenda de temas y objetivos a plantear. Sería deseable que los instrumentos vinieran en blanco sin sugerencias de modo que todos los aportes sean realizados desde la propia inventiva de los actores involucrados.

Con la escasa tradición de cumplimiento de los planes que se tienen en la Argentina un plan de estas características es de dudosa finalización, y teniendo en cuenta el carácter provisorio del PEA, habrá que esperar una versión final y definitiva para su implementación.

En síntesis, este instrumento presenta algunas dificultades expresadas por el actor Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero para su completamiento, las dificultades tienen que ver con el tipo de información solicitada, la dificultad de acceso a las fuentes de información, entre otras. También es notable el carácter puramente cuantitativo de los datos requeridos. Luego el instrumento incorpora definiciones agrupadas en dimensiones, y al final agrega 95 preguntas que deben funcionar como disparadores de datos cualitativos, de las cuales se tomarán las más relevantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Banco Interamericano de Desarrollo (2006) La política de las políticas públicas. Progreso económico y social en América Latina: Editorial Planeta Mexicana
Graglia, J (2018). Políticas públicas: 12 retos para el siglo 21: Konrad Adenauer Stiftung.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2010). Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010 2016. PEA. Versión 2.
Repetto, F (2010). "Coordinación de políticas sociales: abordaje conceptual y revisión de experiencias latinoamericanas", en Los desafíos de la coordinación y la integralidad de las políticas y gestión pública en América Latina: Jefatura de Gabinete de Ministros.

Capacidad Estatal: dosis e instrucciones de uso

Capacidade estatal: dose e instruções de utilização

PALABRAS CLAVE

capacidad del estado
#burocracia
#formulación de políticas

PALAVRAS CHAVE

#capacidade estatal
#burocracia
#policy making

RESUMEN

State Capacity ha visto una fuerte expansión en su uso como herramienta analítica para la investigación de instituciones y políticas públicas. Abrazando amplias dimensiones, la polisemia se ha vuelto inevitable. Considerando la "capacidad del Estado" como *enforcement*, o el poder de alterar la distribución previa de recursos, frente a oposición real o potencial, este paper sigue la literatura que adopta la profesionalización de las burocracias gubernamentales y su impacto en la capacidad del Estado para formular e implementar políticas en áreas de conflicto potencial o latente.

El procedimiento adoptado para verificar esta proposición fue examinar el impacto del indicador de profesionalización de las burocracias gubernamentales en 20 países de América Latina en diferentes áreas públicas. Fue posible identificar una asociación fuerte y positiva entre la métrica adoptada aquí para "capacidad estatal" y "provisión de bienes públicos", "distribución equitativa de recursos" y "acceso a la justicia" e igualmente fuerte pero negativa con "corrupción del Ejecutivo".

RESUMO

State Capacity conheceu forte expansão em seu uso como ferramenta analítica para a investigação sobre instituições e políticas públicas. Envolvendo dimensões amplas a polissemia tornou-se inevitável. Considerando "capacidade estatal" como *enforcement*, ou poder para alterar distribuição prévia de recursos, diante de real ou potencial oposição, este paper segue a literatura que adota profissionalização de burocracias governamentais e seu impacto sobre as habilidades do Estado para formular e implementar políticas em áreas de conflito potencial ou latente.

O procedimento adotado para verificar tal proposição consistiu em examinar o impacto do indicador de profissionalização de burocracias governamentais em 20 países na América Latina sobre diferentes áreas públicas. Foi possível identificar associação forte e positiva entre a métrica aqui adotada para "capacidade estatal" e "provisão de bens públicos", "distribuição igualitária de recursos" e "acesso à justiça" e, igualmente forte mas negativa com "corrupção do Poder Executivo".



**ANDRÉ
MARENCO**

Profesor del Programa de Postgrado en Políticas Públicas de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS)

Professor do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul



amarencoufrgs@gmail.com



**LIDIA
TEN CATE**

Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Instituições Políticas Comparadas (IpoC) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e bolsista do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq).

Investigadora del Grupo de Investigación de Instituciones Políticas Comparadas (IpoC) de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) y becaria del Consejo Nacional de Pesquisa Científica (CNPq).

Capacidad Estatal conoció fuerte expansión en su uso como herramienta analítica para la investigación sobre instituciones y políticas públicas. Sin embargo, la audiencia alcanzada terminó por presentar su cuenta. Revisiones de la literatura internacional sobre el tema permiten reconstituir un panel sobre conceptos adoptados, dimensiones analizadas, medidas empleadas y efectos y resultados esperados por la provisión de “capacidad estatal” (Cingolani, 2013; Cingolani, Thomsson and Crombrugge, 2015; Souza & Fontanelli, 2020). Abarcando dimensiones amplias como “coercitiva”, “fiscal” y “administrativa”, sino también “política”, “transformativa”, “territorial”, “infraestructural” y “legal”, y un amplio ámbito de formas de mensuración, de genéricas (PIB per capita, tasa de asesinatos, densidad de red ferroviaria, censo, indicadores del servicio postal, índices de corrupción) a específicas (ingreso, profesionalización burocracia, infraestructura disponible), la polisemia se volvió inevitable. Considerando resultados o utilidades esperadas, “capacidad estatal” debería ser capaz de responder por control de la violencia (Huntington, 1968), prosperidad (Acemoglu & Robinson, 2012), crecimiento económico (Evans & Rauch, 1999; Acemoglu, Garcia-Jimeno & Robinson, 2015), provisión de bienes públicos (Nistotskaya & D’Arcy, 2018; Mecling and Nahm, 2018) condiciones favorables para democracias (Tilly, 2007) o corrupción y calidad de democracias (Rothstein, 2011).

La *polisemia conceptual* que contagiara la noción de “state capacity” atravesó los mares, ofreciendo nuevos contornos para su ensanchamiento conceptual: *arreglos institucionales* (Gomide & Pires, 2015), *capacidades socioestatales* (Vaz, 2018), *gobernanza* (Gomide & Pires), *capacidades burocráticas* (Souza, 2016; Marengo, 2017), *capacidades administrativas + políticas* (Grin et al, 2019).

El *conceptual stretching* (Sartori, 1970) aquí se vuelve saliente al mezclar categorías que implican en eficiencia, desempeño, hacer más con menos en condiciones de interacciones horizontales, con herramientas diseñadas para diseccionar relaciones marcadas por conflicto y asimetría, donde “capacidad” im-

plica en poder para tomar decisiones sobre oposición existente. De la misma forma, abarca circularidad entre los medios necesarios para la provisión de “capacidad estatal” (coerción, leyes y burocracia administrativa), con efectos producidos por su disponibilidad (provisión de servicios públicos, eficiencia, desarrollo).

La duda aquí se refiere a hasta qué punto la polisemia observada no corresponde a observaciones válidas, pero correspondientes a diferentes *arenas* de políticas públicas. Como demostró Lowi (2009) en su conocida taxonomía, variaciones en las *policies* adoptadas se refieren a la probabilidad de coerción en su aplicación (inmediata o remota) y su destinatario (individual versus ambiental/colectiva). De esta forma, políticas redistributivas son aquellas que generan ganadores y perdedores identificables: Implican en la destinación progresiva o regresiva de recursos, renta o propiedad de x para y , diseñando juegos de suma-cero. En la misma dirección, políticas regulatorias generan aplicación de reglas y sanciones, promoviendo beneficios sociales difusos.

Así, la “capacidad” necesaria para implementar agendas de políticas en áreas de conflicto reducido e interacción horizontal es distinta de aquella exigida cuando se trata de transferir y redestinar recursos, regular cambios económicos, imponer sanciones y determinar ganadores y perdedores.

Capacidad estatal, burocracias y enforcement

En este punto, vale la pena un regreso a los orígenes. Revisitando trabajo seminal de Tilly (2007) sobre “state capacity”, esta es comprendida en modo restricto, equivalente a la intervención de agentes estatales capaz de alterar la distribución de recursos, prerrogativas, estatus, renta o propiedad previamente fijados, utilizando medios como coerción, decisiones, reglamentos, procedimientos, leyes, información, conforme se depende en sus palabras,

State capacities means the extent to which interventions of state agents in existing

non-state resources, activities and interpersonal connections alter existing distributions of those resources, activities and interpersonal connections as well as relations among those distributions. (Tilly, 2007:16)

No muy distante de este punto, podemos encontrar las coordenadas para “capacidad estatal”, fijadas por Skocpol (1985):

implement official goals, especially over the actual or potential opposition of powerful social groups or in the face of recalcitrant socioeconomic circumstances. (Skocpol, 1985: 9).

Los marcos establecidos de que “capacidades estatales” implican en alterar distribución previa de recursos (Tilly) y que esto ocurre delante de real o potencial oposición (Skocpol), implican en atributos distintos de mera eficiencia o gobernanza, correspondiendo a escenario de interacciones de suma-cero, y condiciones capaces de producir *enforcement* junto a potenciales perjudicados o perdedores como resultado de las elecciones promovidas por agentes estatales (Acemoglu, Garcia-Jimeno & Robinson, 2015; Akhtari et al., 2015; Nistotskaya & Cingolani, 2016; D’Arcy & Nistotskaya, 2017).

Bajos índices de “capacidad estatal” inviabilizan la provisión de bienes públicos y no garantizan un ambiente favorable a interacciones democráticas. A medida en que crece la escala en que burocracias públicas codifican y hacen cumplir leyes, ofrecen seguridad, recogen impuestos que financiarán servicios públicos, promueven inversiones y aseguran la legitimidad de decisiones democráticas, es de esperar que indicadores de bienestar y transparencia institucional registren avances. Sin embargo, se puede esperar un *turning point*, a partir del cual la asimetría en las relaciones entre *principals* (ciudadanos, políticos) y sus agentes (burócratas) crea incentivos para la captura de las agencias gubernamentales por el *civil service*, independiente de cuán profesionalizado este sea (Miller & Moe, 1983; McCubbins, Noll, Weingast, 1987; Lewis & Selin, 2015).

Esto puesto, los retos para el uso de “capacidad estatal” como herramienta analítica válida para explicar decisión/implementación de políticas públicas están asociados a dos fronteras: (1) la identificación de récords analítico parsimonioso y una métrica para “capacidad estatal”, a través de variables e indicadores apropiados para mensurarla; (2) una focalización de las áreas de políticas públicas que pueden ser explicadas por esta categoría analítica, distinguiéndola de un instrumento de mil utilidades.

Diferentes estudios buscaron comprobar la asociación entre burocracias *profesionales* e incremento en la *capacidad estatal* para promover la implementación de políticas públicas. Esfuerzo sistemático en esta dirección fue elaborado por Evans and Rauch (1999), identificando una asociación entre profesionalización del servicio público y desempeño económico. Para esto, los autores construyeron una “escala weberiana” para medir niveles de profesionalización verificados en el servicio público en una muestra de 35 países en desarrollo, en el intervalo entre 1970 y 1990. Como indicadores se utilizaron reclutamiento meritocrático y carreras profesionales de largo plazo en el servicio público. Los resultados encontrados revelaron una correlación positiva ($r=0.67$, significativa al 1%) entre los valores de la “escala weberiana” y crecimiento económico, medido por la variación en el PIB per capita en el período. Kohli (2010), adaptó la “escala weberiana”, como una *proxy* de “capacidad estatal”, replicando nuevamente la relación entre calidad de la burocracia pública e indicadores de desempeño económico de países en desarrollo. Igualmente convergentes fueron encontrados de estudio promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre el impacto de las instituciones políticas sobre políticas públicas en América Latina (Bid, 2007).

Considerando “capacidad estatal” como *enforcement*, o poder para alterar distribución previa de recursos, delante de real o potencial oposición, este *paper* sigue la literatura que adopta profesionalización de burocracias gubernamentales y su impacto sobre las habilidades del Estado para formular e implemen-

tar políticas en áreas de conflicto potencial o latente (Evans & Rauch, 1995; Acemoglu, Garcia-Jimeno & Robinson, 2015; Nistotskaya and D'Arcy, 2018).

Parece posible aislar dos elementos capaces de explicar las conexiones entre la profesionalización del servicio público y la adopción de determinadas políticas: (1) información técnica disponible incrementa la influencia de burocracias meritocráticas en la definición de la agenda de políticas públicas; (2) reclutamiento meritocrático y carreras profesionales estables amplían la autonomía de estos agentes con relación a ciclos políticos y electorales, en especial cuanto a la adopción de *policies* redistributivas o reglamentarias, que abarcan imposición de costos concentrados, y, por lo tanto, relaciones de suma-cero entre ganadores y, especialmente, perdedores dispuestos al veto en estas arenas (Krause, Lewis & Douglas, 2006; Lowi, 2009).

Procedimientos y resultados

El procedimiento adoptado para verificar tal proposición consistió en examinar el impacto del indicador de profesionalización de burocracias gubernamentales en 20 países en América Latina sobre diferentes áreas de decisiones de destinación. Como *proxy* de profesionalización burocrática, se adoptó la escala "Criteria for appointment decisions in the state administration"ii, da Base V-DEM, así constituida:

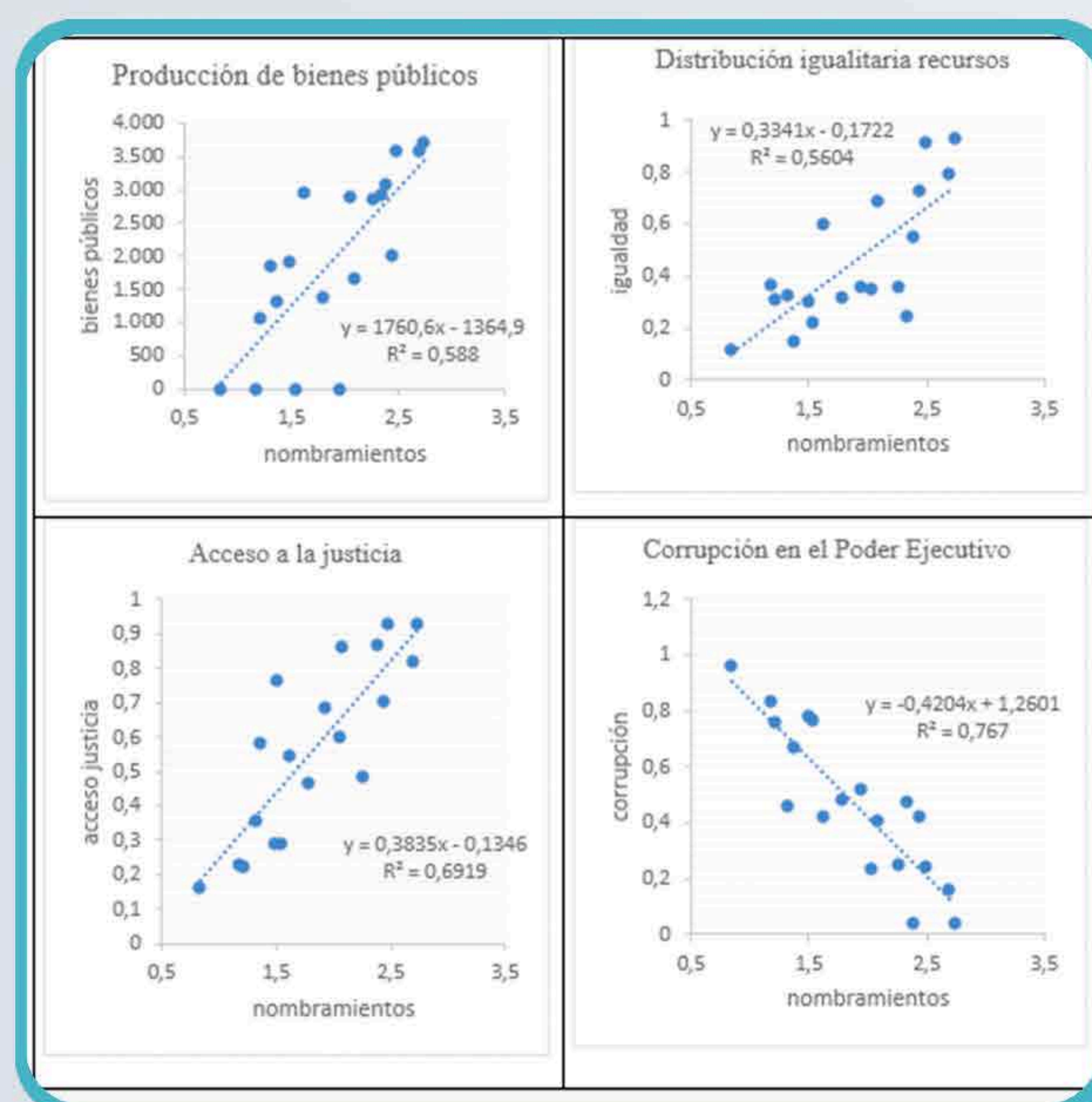
- 0 = todos los nombramientos para cargos públicos se basan en discrecionalidad personal
- 1 = mayoría de los nombramientos basada en relaciones personales
- 2 = cerca de mitad de los nombramientos basada en relaciones personales
- 3 = mayoría de los nombramientos basados en procedimientos meritocráticos
- 4 = nombramientos exclusivamente basados en procedimientos meritocráticos

Para evaluar su efecto sobre decisiones de destinación, se escogieron indicado-

res de "producción de bienes públicos", "distribución igualitaria recursos", "acceso a la justicia" y "corrupción en el Poder Ejecutivo", todos extraídos de la Base V-DEMii.

Los resultados pueden ser verificados en los gráficos a seguir:

Relación entre criterio para nombramientos en la administración pública e indicadores públicos, países América Latina (2019)



Fuente: Varieties of Democracy (V-DEM), procesamiento de los autores

Comparando profesionalización de la administración gubernamental medida por la escala V-DEM para criterios de nombramiento en el servicio público- con indicadores referentes a decisiones públicas en áreas que abarcan asimetría y conflictos redistributivos, fue posible identificar asociación fuerte y positiva entre la métrica aquí adoptada para "capacidad estatal" y "provisión de bienes públicos", "distribución igualitaria de recursos" y "acceso a la justicia" e, igualmente fuerte pero negativa con "corrupción del Poder Ejecutivo".

Conclusión

A través de análisis de países de América Latina, el presente estudio trae al debate el argumento de que la polisemia observada en el avance del uso de la capacidad estatal como herramienta analítica, estaría relacionada a las diferentes arenas de políticas públicas analizadas en los estudios realizados hasta el momento. Con la revisión de los principales estudios de que se dispone información, se puede identificar el uso e incluso ampliación del término “capacidad estatal” relacionado a diferentes políticas.

El estudio trae un ejercicio que además de la búsqueda por poner a prueba el argumento presentado, se dispone a superar uno de los retos relacionados al uso del modelo de capacidad estatal, la focalización necesaria para indicar lo que de hecho se puede explicar. Con el uso de marcos ya expuestos por otros autores como Tilly (2007) y Skocpol (1985) se identifican características que implican escenarios para además de eficiencia o gobernanza, y sí relacionados con escenarios donde hay arenas con conflictos. Sumándose a la literatura que considera la profesionalización de burocracias factor relevante para explicación de niveles distintos de capacidad de estatal, se analizó el impacto del indicador de profesionalización de burocracias gubernamentales en diferentes áreas de decisiones de destinación.

La prueba de las arenas de destinación mensu-

radas presentaron valores que corroboran las hipótesis, mostrando relación fuerte y positiva entre capacidad estatal y políticas redistributivas y reglamentarias (Lowi, 2009). El indicativo es de que burocracias reclutadas de forma meritocrática generan más capacidad estatal para enfrentamiento de los conflictos involucrados en la creación e implementación de políticas con “perdedores y “ganadores”. La relación negativa encontrada con la proxy de corrupción en el poder ejecutivo indica poder fiscalizador y de alivio del ciclo electoral cuando de la capacitación de la burocracia. El mecanismo por el cual eso sería posible, como citado anteriormente, se da por la calificación de la influencia burocrática en la definición de la agenda y la ampliada autonomía que el cuerpo adquiere con relación al ciclo político.

De esa forma el estudio abre precedente para análisis similares con uso de otros recortes, a la luz de la capacidad estatal como modelo posible para profundizar estudios sobre arenas de destinación redistributiva y reglamentaria. Dentro del escenario democrático hoy esas arenas son responsables por importantes cambios en la dinámica institucional y presupuestaria de diferentes países y otros niveles territoriales. Para más allá el refinamiento del foco de la capacidad estatal mientras herramienta analítica induce al paso de maduración necesaria para la técnica, una vez que ya se consolidó su uso, ahora se hace necesario estudios como este para su uso correcto en cantidad y método como lo señala el título.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acemoglu, D.; García-Jimeno, C. y Robinson, J. (2015). “State Capacity and Economic Development: A Network Approach”. *American Economic Review*. Vol 105(8): 2364-2409.
- Acemoglu, D.; Robinson, J. (2012). *Why Nations Fail? The origins of power, prosperity and poverty*. New York: Crown.
- Akhtar, M. et al. (2015). “Political Turnover, Bureaucratic Turnover, and the Quality of Public Services”. Working Paper, Harvard University.
- Banco Interamericano de Desarrollo/BID (2007) *A política das políticas públicas*. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier.
- Cingolani, L. (2013). “The state of state capacity: a review of concepts, evidence and measures”. Maastricht: UNU-MERIT, Working Paper, n. 53.
- Cingolani, L.; Thomsson, K. and Crombrugghe, D. (2013). *Minding Weber more than ever? The impact of state capacity and bureaucratic autonomy on development goals*. Bordeaux ECPR General Conference.
- Evans, P.; Rauch, J. (1999). “Bureaucracy and growth: A cross-national analysis of the effects of “Weberian” state structures on economic growth”. *American Sociological Review*, 64(5):748-765, 1999.
- Gomide, A.; Pires, R. (2016). “Governança e capacidades estatais: uma análise comparativa de programas federais”. *Rev. Sociol. Polit.*, v. 24, n. 58, p. 121-143
- Grin, Eduardo; Fernandes, G. (2019). “Capacidades estatales en los municipios brasileños: resultados tímidos en un contexto de autonomía política local y un escenario de dependencia financiera”. En: Grin, E. et al (Org.). *Capacidades estatales en gobiernos locales iberoamericanos - actualidad, brechas y perspectivas*. 1ed. Rio de Janeiro: FGV Editora, p. 92-148.
- Huntington, S. (1968). *Political order in changing societies*. New Haven: Yale University Press.
- Kohli, A. (2010). “State capacity for development”. *Global Event Working Paper*, New York: UNDP.
- Krause, G.; Lewis, D. y Douglas, J. (2006). “Political appointments, civil service systems and bureaucratic competence: organizational balancing and executive branch revenue forecasts in american states”. *American Journal of Political Science*, vol. 50, n° 3, pp. 770-787.
- Lewis, D. y Selin, J. (2015). “Political Control and the Forms of Agency Independence”. *George Washington Law Review*, vol. 83, n° 4/5, pp. 1487-1516.
- Lowi, T. (2009). *Arenas of Power*. Bould: Paradigm Publishers.
- Marengo, A. (2017). “Burocracias Profissionais Ampliam Capacidade Estatal para Implementar Políticas? Governos, Burocratas e Legislação em Municípios Brasileiros”. *Dados - revista de ciências sociais*, v. 60, p. 1025-1058.
- Mccubbins, M.; Noll, R.; Weingast, B. (1987). “Administrative procedures as instruments of political control”. *Journal of Law, Economics and Organization*, 3, 243-279.
- Meckling, J; Nahm, J. (2018). “The power of process: State capacity and climate policy”. *Governance* 31: 741– 757. <https://doi.org/10.1111/gove.12338>
- Miller, G. y Moe, T. (1983). “Bureaucrats, legislators and the size of government”. *American Political Science Review*, vol. 77, pp. 297-323.
- Nistotskaya, M.; D’Arcy, M. (2018). “State Capacity, Democracy and Public Good Production: The case of Child Mortality”. *QoG Working Paper Series N° 14*.
- Rothstein, B. (2011). *The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective*. Chicago: University Of Chicago Press.
- Sartori, G. (1970). “Concept Misformation in Comparative Politics”. *American Political Science Review* Vol. 64, No. 4, pp. 1033-1053
- Skocpol, T. (1985). “Bringing the state back in: strategies of analysis in current research”. En: Evans, P.; Rueschemeyer, Dietrich; Skocpol, Theda, eds. (1985). *Bringing the State Back In*. Cambridge, England: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-71713-8.
- Souza, C.; Fontanelli, F.(2020). *Capacidade estatal e burocrática: sobre conceitos, dimensões e medidas*. En: Mello, J.; Ribeiro, V.; Lotta, G.; Bonamino, A. V.; Paes de Carvalho, C. (Org.). *Implementação de políticas e atuação de gestores públicos: experiências recentes das políticas de redução das desigualdades*. 1ed. Brasília: Ipea, v. 1, p. 45-71.
- Souza, C. (2016). “Capacidade Burocrática no Brasil e na Argentina: Quando a Política Faz a Diferença”. En Gomide, A. y Boschi, R. (eds.), *Capacidades Estatais em Países Emergentes: o Brasil em Perspectiva*. Rio de Janeiro, Ipea, pp. 51-103.
- Tilly, C. (2007). *Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Vaz, A. (2018). “Dispersão decisória, centralidade política e entropia burocrática: mitigando custos transacionais na gestão pública”. *Opinião Pública*, Campinas, vol. 24, n° 3, set.-dez., p. 622-669.
- i Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Il México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay, Venezuela.
- ii To what extent are appointment decisions in the state administration based on personal and political connections, as opposed to skills and merit?
- iii <https://www.v-dem.net/en/>, consulta el 11 de mayo de 2019.

Proteção social no Brasil e Argentina: governos conservadores e os desafios atuais diante da pandemia

La protección social en Brasil y Argentina: los gobiernos conservadores y los desafíos actuales ante la pandemia

PALABRAS CLAVE

#Protección social
#Argentina
#Brasil
#Desarrollo

PALAVRAS CHAVE

#Proteção social
#Argentina
#Brasil
#Desenvolvimento

RESUMEN

Este trabajo analiza en forma comparada el desarrollo de la protección social en forma comparada en Brasil y Argentina en el siglo XXI. Para esto, consideramos las trayectorias individuales de cada país, asumiendo que ambos avanzaron durante los años 2000 en la construcción de estructuras de protección social de una manera más inclusiva, y que los gobiernos conservadores tuvieron como objetivos poner en jaque el modelo de Estado y las políticas sociales anteriores. Las elecciones de Macri y Bolsonaro tomaron este giro, pero en la Argentina el retorno al modelo anterior se produjo rápidamente, mientras que en el Brasil persiste la peor experiencia de desmantelamiento del Estado y sus mecanismos de protección social del período posterior a la democratización.

RESUMO

Este documento analisa o desenvolvimento da proteção social no Brasil e na Argentina no século XXI. Consideramos as trajetórias individuais de cada país, assumindo que ambos avançaram durante os anos 2000 na construção de estruturas de proteção social de uma forma mais inclusiva, e que os governos conservadores tinham como objetivos pôr em xeque o modelo de Estado e de políticas sociais anteriores. As eleições de Macri e Bolsonaro sacramentaram essa guinada, no entanto na Argentina o retorno ao modelo anterior deu-se rapidamente, enquanto o Brasil ainda perdura na pior experiência de desmonte do Estado e de seus mecanismos de proteção social do período pós-redemocratização.



**LUCIANA
PAZINI PAPI**

Professora Adjunta do curso de Administração Pública e Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Dr. em Ciência Política pela mesma Universidade e coordenadora do Núcleo de Pesquisas em Gestão Municipal – NUPEGEM.

Profesora Adjunta del curso de Administración Pública y Social de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Doctora em Ciencia Política por la misma universidad, y coordinadora del Núcleo de Investigaciones en Gestión Municipal (NUPEGEM)

✉ luppapi@yahoo.com.br



**LÍGIA
MORI MADEIRA**

Professora Associada do Departamento de Ciência Política e Coordenadora do PPG em Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Dra. em Sociologia pela mesma Universidade e coordenadora do Núcleo de Estudos em Direitos, Instituições e Políticas Públicas – NEDIPP

Profesora Asociada del Departamento de Ciencia Política y coordinadora del PPG en Políticas Públicas de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Doctora en Sociología por la misma universidad y coordinadora del Núcleo de Estudios en Derechos, Instituciones y Políticas Públicas NEDIPP

✉ ligiamorimadeira@gmail.com

Introdução

Diante do cenário recente de pandemia ficou evidente o quanto a proteção social de um país é fundamental na gestão dos efeitos da crise provocada pela doença. Sistemas de proteção com maior capacidade de cobertura universal de saúde e assistência social, assim como com elevada articulação intersectorial, como os casos dos países escandinavos e como o continental alemão, têm revelado melhores condições de lidar com a crise e mitigar seus efeitos (Madeira et al, 2020).

Considerando a atualidade do debate e o quanto de desafios se impõem aos países no combate ao coronavírus, o artigo se propõe a refletir sobre a importância da proteção social, em especial sobre as políticas de combate à pobreza e assistência social atuais no Brasil e Argentina países, considerando o peso que as políticas conservadoras pretéritas e atual (no caso brasileiro) podem ter na (des) estruturação das políticas públicas. Analisar esse cenário do ponto de vista comparado pode dar pistas sobre modelos de proteção social bem-sucedidos, assim como dos constrangimentos que afetam o processo de implementação de medidas e seus efeitos políticos.

Estudos em políticas públicas ganharam grande destaque na agenda da ciência política latino-americana, dado o crescente interesse acadêmico sobre o que os governos fazem, como fazem e por que fazem. Se por um lado autores do *policy study* argumentam com frequência que a definição dos tipos de políticas é determinada pelas instituições (tipos de governo e natureza dos regimes (Przeworski et al, 1997); por outro, há os que defendem que as políticas públicas também fazem a política (Lowi, 1972). Nesse sentido, as políticas geram tendências, difusão, podem sustentar e derrubar governos. Sinteticamente a *policy* pode influenciar a *politics*. É na confluência dessas duas linhas de argumento que este artigo trabalha, indicando que legado e dependência de trajetória de políticas públicas são fruto de definições institucionais do passado, mas indicando também que escolhas sobre as políticas públicas em curso no contexto da pandemia têm um peso grande na manutenção ou derrubada de governos.

No caso em análise, consideradas as trajetórias individuais de cada país, ambos avançaram durante os anos 2000 na construção de estruturas de proteção social em moldes mais inclusivos, assim como ingressaram em governos conservadores cujos objetivos eram pôr em xeque o modelo de Estado e de políticas sociais anteriores. As eleições de Macri e Bolsonaro sacramentaram essa guinada, no entanto na Argentina o retorno ao modelo anterior deu-se rapidamente, enquanto o Brasil ainda perdura na pior experiência de desmonte do Estado e de seus mecanismos de proteção social do período pós-redemocratização. Quais as diferenças entre atravessar uma pandemia em um e outro modelo de Estado? Os estudos em políticas públicas podem ajudar a compreender e responder essa questão.

Nas sociedades latino-americanas, que acumulam problemas históricos como exclusão social, pobreza, desigualdade e baixa qualidade de prestação de serviços em educação, saúde e assistência social, o conhecimento científico crítico dos problemas sociais é fundamental para uma intervenção estatal adequada e de qualidade. Os estudos em políticas públicas têm muito a contribuir, sobretudo os de perfil comparado.

Sendo assim, este artigo tem como objetivo refletir sobre a construção de estruturas de proteção social, especialmente não contributivas, no Brasil e Argentina e seus efeitos (políticos e de políticas) na gestão da crise da COVID-19.

Para tanto organizamos a seguinte estrutura: após essa introdução, apresentamos as características e especificidades da proteção social desenvolvida na América Latina, para posteriormente analisar comparativamente Brasil e Argentina com base em seus sistemas de proteção social e políticas de desenvolvimento. Iniciamos explicitando porque comparar ambos os países e traçamos um panorama da construção da proteção social com foco, sobretudo, nos padrões erigidos a partir dos anos 2000 e no desmonte acarretado pelo contexto político conservador que emplacou nos dois países com os governos Macri e Bolsonaro. Por fim refletimos acerca dos desafios atuais da proteção social diante da crise do coronavírus.

1. Proteção social na América Latina

As sociedades, desde as mais tradicionais até as mais complexas, sempre buscaram formas de manter-se bem e em equilíbrio para lograr dos benefícios da vida coletiva. Para tanto, historicamente, desenvolveram estratégias de proteção diante das inseguranças da vida natural e social que permitiram a sobrevivência e a integração, sob várias formas (Di Giovanni, 1998).

Iniciando pelas formas comunitárias e familiares, como cooperativas de auxílio mútuos e organizações ligadas ou não à Igreja, os sistemas de proteção social foram se complexificando com o avanço do capitalismo e o processo de industrialização e urbanização que trouxeram consigo a agudização das vulnerabilidades e insegurança sociais (Kerstenetzky, 2012). Com isso, o Estado nacional foi assumindo paulatinamente o dever de proteção frente às crescentes demandas oriundas da modernidade, provendo proteção social por meio de políticas públicas sociais (Di Giovanni, 1998; Castel, 2003). Por ter uma intrincada relação com o processo de complexificação societária derivada da evolução do modelo produtivo, os sistemas de proteção social se configuraram conforme às peculiares realidades socioeconômicas de cada sociedade e seus distintos níveis de conflito (Marshall, 1967).

Se, nos países centrais no contexto do pós-guerra, investia-se em grande medida na ampliação das seguranças sociais rumo a processos de universalização de políticas como educação e saúde, nos países periféricos, dado o distinto tempo histórico e a distinta rota do desenvolvimento, iniciou-se a montagem dos modernos sistemas de proteção social e a tentativa de construção do welfare state no âmbito do capitalismo dependente apenas nos anos 1930 (Draibe, 2011; Diniz, 2007) e ainda hoje há forte discussão sobre sua rota incompleta (Santos, 1987).

No caso latinoamericano, conceituação e categorização dos regimes de bem-estar é tarefa complexa, dadas as especificidades do nosso continente, em que há sucessão de períodos democráticos e autoritários; direitos civis e políticos não garantidos e/ou efetivados para toda a população; diferenças territoriais, econômicas, demográficas significativas; disparidades em matéria de gasto entre os países; implementações em espaços temporais distintos (Del Vale, 2010).

Entretanto, as origens do Welfare State latinoamericano podem ser encontradas nas explicações de Mesa Lago (1989, 1996, 2003), que considerou o surgimento da seguridade social como um fenômeno dirigido pela demanda, refletindo as mudanças sociais e estruturais dos países, gerando sistemas particularistas, estratificados e meritocráticos. Já de acordo com Draibe e Riesco, na América Latina os Estados de Bem-Estar dirigiram o processo de construção segundo duas sucessivas estratégias: a desenvolvimentista e a liberal (Draibe & Riesco, 2011).

Na primeira, dada a ausência dos atores responsáveis pelos processos originários (trabalhadores assalariados e empresariado), coube ao Estado atuar na constituição do capitalismo, cumprindo o papel de ativista e regulador, criando instituições básicas de infraestrutura e as bases da acumulação capitalista, ao mesmo tempo em que erigiu um sistema de políticas sociais (de educação e de saúde, com coberturas limitadas, mantendo-se os graus de exclusão social) responsável pela proteção dos trabalhadores assalariados (Draibe & Riesco, 2007, p. 42; Draibe & Riesco, 2011, p. 239-240). Assim relegou o restante da população -os trabalhadores rurais, os pobres urbanos e a massa de integrantes do crescente mercado informal de trabalho à gestão filantrópica da pobreza.

Na segunda, erigida após e em função da crise dos anos 1980, foram a agenda das insti-



tuições internacionais e a adoção de tendências gerais responsáveis por mudanças profundas nos sistemas latino-americanos de políticas sociais, que deram centralidade ao tema da pobreza, a expansão de programas sociais focalizados, especialmente de transferência monetária para os grupos sociais mais pobres, fazendo frente aos programas sociais universais (Draibe & Riesco, 2011, p. 243-244). Apesar de os autores apontarem que tais reformas não obedeceram a um padrão único no continente, nem afetaram os países de modo homogêneo, é certo que houve fragilização nos programas sociais e redução nos Estados de Bem-estar, sem contudo, eliminar suas estruturas prévias (Draibe & Riesco, 2011, p. 245).

Há vasta literatura classificando os países latino americanos em diferentes modelos de proteção social (Del Valle, 2010; Barrientos, 2009 Draibe & Riesco, 2006, 2009, 2011) partindo seja da classificação a respeito dos primeiros sistemas de seguridade social (Mesa Lago, 1989); considerando a estrutura ocupacional e a cobertura dos sistemas de seguridade social (Del Valle, 2010); seja levando em conta o grau de industrialização e a incorporação política de grupos marginalizados para a formação dos sistemas de proteção social (Pribble, 2011), ou o nível de universalismo¹ (Pribble, 2014).

A despeito das diferentes classificações e do período em que foram produzidas, parece haver consenso na literatura em apontar três grandes grupos na América Latina, sendo que no primeiro encontraríamos países como Uruguai, Argentina, Chile e Costa Rica; num segundo grupo estariam Brasil e México; e num terceiro os países da América Central, além de Bolívia, Equador, Peru e Paraguai. O Brasil, dadas suas dimensões e suas desigualdades, muda de posição em alguns modelos, variando entre o primeiro e o segundo grupo.

Assim, apesar das diferenças terminológicas, costumava-se identificar, portanto, Argentina, Chile, Costa Rica e Uruguai como os regimes de maior êxito no continente, dado o alcance de melhores resultados de suas políticas de bem-estar, os níveis relativamente baixos de pobreza e desigualdade e os altos níveis de capital humano, gasto social e alocação de benefícios de maneira progressiva; enquanto Brasil, México tendendo a ficar em um patamar inferior, caracterizado pela existência de sistemas de proteção, mas ainda com parcelas da população descobertas. Os demais países, coincidentemente os de baixa renda (LICs), estavam classificados, em várias análises, como tendo regimes excludentes.

Dentre todas essas classificações, nos é muito cara a que considera fatores como o legado das políticas, a competição eleitoral e as características dos partidos (não apenas em termos ideológicos, mas principalmente sua estrutura organizacional e seus mecanismos de linhagem), somados a outros fatores como o desenho político institucional, a capacidade de mobilização da sociedade civil, o papel dos atores internacionais e a performance da economia na modelagem da natureza e do escopo das reformas nos sistemas de políticas sociais na América Latina (Pribble, 2014, p. 10).

Partindo desse cenário, em que Brasil e Argentina ora figuram em um mesmo grupo de classificação de sistema de proteção social, ora em grupos distintos; mas cuja trajetória recente indica a presença da segunda rota em direção ao universalismo, optamos por apresentar razões para compará-los.

2. A problemática da proteção social e do desenvolvimento em Brasil e Argentina: por que comparar Brasil e Argentina?

Brasil e Argentina são dois países que cumprem os requisitos necessários à pesquisa

1. "Universalism refers to social policies that guarantee coverage for a set of essential social services (preschool, primary, and secondary education as well as health care) and ensure a basic minimum income during the working years and after exiting the labor market because of old age, sickness, or unemployment. In this way, the concept of universalism recognizes the important role of state-provided social spending, but is simultaneously concerned with the question of whether this spending reaches marginalized population. [...] My definition of universalism does one step further, contemplating to what extent social policies improve the quality of services and the size of transfer payments, as well as whether the financing of such programs is fiscally sustainable" (Pribble, 2014: 7-8).

comparada: *proximidade de sociedades no tempo e no espaço, similaridade nos fatos observáveis e certa dessemelhança no ambiente em que ocorrem. Quer dizer, sociedades sujeitas à ação de mesmas causas, com alguns traços originários comuns e importantes dessemelhanças no ambiente interno* (Bloch, 1963). Os dois países foram fundados na relação centro-periferia, possuem as maiores dimensões geográficas da América Latina e acumulam problemas ligados ao desenvolvimento econômico e à inclusão social. Ademais, fazendo fronteira entre si, possuem forte peso político na região, influenciando os demais países a adotarem não apenas modelos econômicos, mas projetos políticos e desenhos de políticas públicas.

Portanto, apesar das distinções culturais e aspectos que singularizam a formação nacional e simbólica das sociedades, em termos processuais – políticos e econômicos – pode-se afirmar que ambos produzem (e respondem a) fenômenos relativamente sincrônicos (Fiori, 2007). Isso é evidente quando observamos alguns paralelismos.

Do ponto de vista político econômico, ainda como colônia e logo após suas independências, ambos implementaram modelos de desenvolvimento econômico voltados ao exterior (agroexportação). A partir da década de 1930, no Brasil, e 1940, na Argentina, dado o cenário de crise, ambos os países tentaram inverter importações e ampliaram o papel do Estado na condução da economia, da industrialização e na produção de uma incipiente proteção social. Na década de 1970, passaram concomitantemente por regimes autoritários, e, na década seguinte, por transições democráticas, com pequenas diferenças temporais nos acontecimentos. Na década de 1990 foram atingidos pela crise econômica e aplicaram reformas pró-mercado e as orientações do consenso de Washington no que tange às privatizações, à descentralização e à focalização de políticas sociais. Na virada do século XXI, a partir do desgaste da aplicação das ideias político-econômicas neolibere-

rais, mais uma vez esses dois países seguiram rotas semelhantes: elegeram governos de centro-esquerda como resposta, e, nesse caso, não apenas acompanharam a onda da América Latina, mas lideraram esse processo de mudança, dado seus pesos políticos na região. Nos anos 2015 e 2016, respectivamente, ambos os países guinaram sua política à direita novamente, no caso brasileiro por meio do *impeachment* da presidenta Dilma Rousseff (PT), deixando seu vice Michel Temer (PMDB) no poder, responsável por iniciar o processo de retirada e desmonte do Estado aprofundado com a eleição de Jair Bolsonaro (do Partido Social Liberal - PSL- no momento da eleição e atualmente sem partido); enquanto no caso argentino, por meio do voto popular, a população levou ao poder Mauricio Macri (Proposta Republicana) cuja agenda liberal acabou por aprofundar a crise econômica argentina e a restringir essa experiência a apenas um mandato.

No que se refere à construção da proteção social, em ambos os países ela foi forjada a partir de uma concepção contributiva, por meio dos seguros sociais voltados aos trabalhadores formais e, em geral, urbanos, em que a carteira de trabalho era o único garantidor de direitos e cidadania. Atrelado a um processo de desenvolvimento coordenado pelo Estado, típico de países periféricos, Brasil e Argentina conduziram o processo de industrialização e a sustentação para o surgimento de classes (empresariado e trabalhadores assalariados urbanos) por meio da concessão de direitos e proteção exclusivos àqueles envolvidos em relações de assalariamento formal. Com isso, os demais indivíduos, trabalhadores rurais ou informais, ficaram sem qualquer tipo de cobertura de proteção orientada pelo Estado, sujeitos à filantropia realizada predominantemente por instituições caritativas, eclesiais e por programas subsidiários desenvolvidos por primeiras damas.

No Brasil o movimento de constituição do sistema incipiente de proteção social iniciou em 1930 com Getúlio Vargas atrelado ao projeto

de construção do Estado moderno de bases industriais. Observa-se nesse período o surgimento de um conjunto de iniciativas de criação de órgãos gestores de políticas sociais tais como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e o Ministério de Educação e Saúde Pública, assim como a normatização de direitos ligados ao trabalho: a instituição da carteira de trabalho, a jornada de 8h diárias no comércio e indústria, a regulamentação do trabalho feminino, a regulamentação do trabalho de menores, o direito a férias, além de pensões e aposentadorias a serem providas pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP'S) (Earp e Kornis, 2004: 38). Esses direitos foram estruturados em um modelo de proteção social focado nos trabalhadores urbanos sob proteção de um Estado que objetivava manter a ordem e incluir esta camada societária no mercado de consumo. Já a proteção social não contributiva - ou seja, o conjunto de programas e ações que buscam assegurar um nível básico de bem estar econômico e social a todos os membros da sociedade, possibilitando sustentar níveis de qualidade de vida considerados básicos para o desenvolvimento das pessoas (Cecchini & Martínez, 2011) - ficou relegada a iniciativas voluntárias, filantrópicas, configurando-se até 1988 como um campo de baixa prioridade estatal.

Na Argentina três princípios básicos orientaram ações de proteção social simultaneamente até meados do século XX: ações filantrópicas de atenção aos pobres, veiculadas pelas instituições de la *Sociedad de Beneficencia*²; um extenso sistema público de educação básica moldado sobre o princípio da cidadania; e um crescente sistema de seguridade social contributiva destinado aos trabalhadores assalariados, configurando uma visão *trabajo céntrica* que impregna até hoje os olhares sobre o modelo de bem estar social argentino (Arcidiácono, 2012). No período peronista, aprofundou-se e massificou-se tal modelo de proteção social centrada na defesa dos trabalhadores formais, com

ênfase na seguridade contributiva (Isuani, 2008, Repetto & Masseto, 2011). Com efeito, esse foi um período em que se expandiu a participação do Estado na atenção médica e na ampliação da cobertura do sistema previdenciário. No entanto no que se refere ao sistema de assistência social, houve o aprofundamento do modelo de benemerência iniciado pela *Fundação Eva Perón*³, que se perpetuou como legado para a proteção social não contributiva ao longo da história argentina. Conforme Isuani (2008: 35), os programas sociais prestados pela beneficência pública foram assumidos logo no fim do governo peronista em 1955, tendo diferentes denominações: Ação social, desenvolvimento social e bem estar social, todas responsáveis por prestar assistência aos pobres distribuindo alimentos, vestimentas, materiais de construção e transferência de subsídios diretos.

Processos de democratização marcaram os dois países durante os anos 1980 e 1990, com direitos sociais inscritos e (re) escritos nas Constituições brasileira e argentina⁴, com definições e compartilhamento de competências de políticas sociais que acabaram por dar grande foco à descentralização. As garantias constitucionais oriundas de grande atuação da sociedade civil e de movimentos sociais criaram grandes expectativas pela ampliação da proteção social nos países e a subtração de seus passados autoritários e centralizados, exigindo reformulação das instituições estatais e maior abrangência das políticas públicas.

No entanto, se os documentos constitucionais garantiram cidadania, o período de grande recessão que atingiu a América Latina nessas décadas acabou marcando a adoção de políticas de liberalização, pela flexibilização das relações laborais e entrega de empresas públicas à iniciativa privada. Assim, ao contrário do cumprimento do texto legal, em termos da proteção social foram décadas que representaram o desmonte do ELADBES (Draibe, 2011) e a produção da chamada "nova questão social", gerada pelos altos níveis de desemprego, subemprego, informalidade e a exclusão social (CEPAL, 2014; Repetto & Dal Masseto, 2011).

2. Foi uma instituição criada pelo presidente Bernardino Rivadavia em 1823, quando decidiu que o Estado se encarregaria do cuidado com os pobres. A partir desse momento as damas da oligarquia de Buenos Aires presidiram a instituição conduzindo-a com base na lógica da benemerência (Castineiras, 2013).

questão social”, gerada pelos altos níveis de desemprego, subemprego, informalidade e a exclusão social (CEPAL, 2014; Repetto & Dal Masseto, 2011).

No Argentina, que investiu desde os primórdios em um modelo de inclusão por meio do assalariamento, o contexto recessivo (dos anos 1980 até inícios do século XXI) produziu um impacto em termo do aprofundamento dos problemas sociais (Repetto & Dal Masetto, 2011). Assim, as fortes variações nos índices de pobreza medidos em função da renda, sensíveis às mudanças macroeconômicas, levaram a um empobrecimento inclusive dos setores médios (ibidem, 2011)⁵.

O Brasil não destoou muito dessa realidade. Em 1993 o número de indivíduos considerados “pobres” (com renda domiciliar per capita inferior à linha de pobreza) chegou em 60,9 milhões de brasileiros e a taxa de pobreza (fração da população com renda domiciliar per capita inferior à linha de pobreza) a 43,0%. A desigualdade, medida pelo Índice de Gini, atingiu seu nível máximo em 1993 (0,604) se comparado com o ano de 2012, quando o coeficiente baixou incisivamente até o valor de 0,530. A respeito da ocupação no mercado de trabalho, até o ano de 1999 havia uma tendência crescente à informalização, chegando-se a um patamar de quase 52,0% da força laboral nos anos 2000 (Campos, 2015).

Toda essa situação de crise pressionou à apresentação de soluções por parte do sistema de proteção social à população mais atingida: os pobres e vulneráveis. Apesar da ampliação dos direitos constitucionais e da inclusão da assistência social como um pilar da proteção social não contributiva garantidora de direitos no caso brasileiro, as opções em ambos países foram pela implementação de

ações assistenciais focalizadas, incluindo-se políticas dispersas de combate à pobreza, como “transferências condicionadas de renda”; transferências de responsabilidade de execução de serviços para ONG’s e, no caso brasileiro descentralização da autonomia para os municípios desenharem e implementarem ações de assistência social conforme suas capacidades (Papi, 2017). Desta forma, avançou-se pouco na institucionalização de uma política de proteção social não contributiva que fizesse frente ao crescente empobrecimento e vulnerabilidade social trazidos pela crise dos anos 1990.

2. Os anos 2000 os governos de centro-esquerda no Brasil e Argentina: o debate sobre desenvolvimento social

A desigualdade de renda e oportunidades sempre foi uma das principais barreiras para o desenvolvimento humano, social e econômico na América Latina. No entanto, a partir dos anos 2000 mudanças significativas e a emergência de novas formas de assistência social caracterizaram um processo de inflexão na história da proteção social de nossos países, caracterizados por novos moldes de assistência social (Barrientos & Santibáñez, 2009, p. 6).

Essas reformas foram conduzidas a partir da eleição dos governos de centro-esquerda no Brasil e Argentina, revisando-se o padrão de fragilidade das políticas de proteção social típico de um cenário anterior de deterioração social. Tanto Nestor Kirchner quanto Luiz Inácio Lula da Silva elencaram as políticas de combate à pobreza e de assistência social como prioritárias para atender ao projeto político eleito nas urnas.

Inserido em um debate sobre desenvolvimento social dependente de uma conjunção de

3. Em 1948 ano foi criada a Fundação Ajuda Social Maria Eva Duarte de Perón por um decreto presidencial (220.564/48) para ser presidida pela primeira-dama Eva Perón. Nela se iniciou um trabalho social voltado às crianças, idosos, mães solteiras e mulheres sem lar – pessoas pertencentes aos estratos mais carentes da população. Foi fundada uma casa de passagem para mulheres e crianças desabrigadas (Castineiras, 2013).

4. No Brasil a nova Constituição Federal em 1988, inscreveu os direitos sociais como fundamentais para se assegurar a justiça social. Conhecida como constituição cidadã, incluiu a assistência social como parte da seguridade social também composta pela saúde e a previdência. Com isso avançou-se em uma concepção de proteção social não contributiva, sendo a assistência social reconhecida como uma política pública garantidora de direitos, voltada, especialmente, a segmentos populacionais que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica. Na Argentina a Constituição federal de 1853 foi reformada em 1994, momento em que se incluiu no artigo 14, a seguridade social com um caráter de integral e irrenunciável. Entretanto, por não ser uma constituição detalhada como a brasileira, não foi dado o devido alcance à área de assistência social como no Brasil.

5. De 1990 a 1996 a inflação aumentou e chegou a ter média anual de 252% (1990 a 1996), o desemprego alcançou uma taxa histórica de 18,80% em 1997 e a pobreza agravou significativamente (Fausto & Devoto, 2004).

fatores - como a eleição de partidos de centro-esquerda/ esquerda; somada à expansão econômica de países emergentes como a China, que impulsionou a demanda por minerais e alimentos, garantindo um ciclo de recuperação econômica com grande expansão de exportação de produtos primários, ampliando as taxas de crescimento; permitiu-se uma expansão no gasto social, o que favoreceu uma mudança paradigmática na concepção das políticas sociais e um novo padrão de desenvolvimento social baseado em quatro eixos principais: uma considerável expansão do gasto em educação e saúde e no investimento social em geral; um aumento dos salários médios reais e dois salários mínimos; um incremento na cobertura e na qualidade da proteção social aos trabalhadores; a expansão e consolidação de transferências condicionadas de renda aos pobres (Larrea, 2015, p. 109-109).

Para esse novo padrão de desenvolvimento social, os governos defenderam a recuperação do papel do Estado de modo a promover o crescimento do país não apenas do ponto de vista econômico, mas sobretudo do resgate da dívida social.

No caso brasileiro, o governo Lula iniciou seu governo priorizando o combate à pobreza - uma das bandeiras centrais de sua eleição. Para isso criou o Programa Bolsa Família, principal programa de transferência de renda condicionada do governo federal e o maior da América Latina que chegou ao ano de 2013 com 13,8 milhões de famílias inseridas, o que correspondia a um quarto da população brasileira (Campello & Neri, 2013). A criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) em 2004 buscou articular e centralizar as políticas de transferências diretas de renda, de segurança alimentar, assim como, de assistência social, antes dispersas, dando densidade a esse campo e resolvendo problemas históricos de superposição de ações e ineficiência dos serviços.

Quanto à assistência social, a criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em 2004 e das Normas Operacionais Básicas (NOBs) de 2005, 2010 e 2012 configuraram uma concepção de sistema orgânico da política pública, em que a articulação entre as três esferas de governo constituiu-se como elemento fundamental, a exemplo do Sistema Único de Saúde (SUS). O SUAS estabeleceu a regulação e a organização das ações socioassistenciais em todo o território nacional, dado que todos os entes federados têm responsabilidades e atribuições específicas estabelecidas na Norma Operacional Básica do SUAS.

Os avanços da época no campo assistencial não foram poucos: dados do Censo SUAS de 2010 mostravam uma crescente institucionalização da assistência social no Brasil, por meio de instalações de equipamentos públicos. Até 2010, foram implantados no país 7.475 novos CRAS, em 5.254 municípios (95% dos municípios brasileiros) e 2.109 novos CREAS. Dados do Censo SUAS de 2011 apontavam que 75% dos municípios brasileiros passaram a contar com secretarias municipais exclusivas. Ademais registrou-se um crescimento de profissionais de 9,6% ao ano, entre 2005 e 2010, totalizando 232.085 profissionais, sendo que 47% eram compostos por vínculos estáveis. Embora estudos apontassem para essa fragilidade do SUAS - funcionários com vínculo precário (BRASIL, 2014) - e a necessidade de se avançar na qualificação técnica por meio de contratos com proteção aos direitos trabalhistas, o quadro mostrava muitos avanços se comparado ao período anterior. Do ponto de vista dos indicadores sociais, as políticas combinadas de transferência de renda, inclusão social, trabalho e renda ofereceram um panorama distinto dos anos 1990. A taxa de pobreza recuou entre 2003 e 2012, chegando a 15,9% da população e o número de indivíduos considerados "pobres" chegou ao menor patamar desde 1994 atingindo 30,4 milhões em 2012 - número ainda

6. No caso brasileiro, os principais programas de Transferência Condicionada de Renda no governo de Fernando Henrique Cardoso foram: o Bolsa-Alimentação (na área de saúde); o Agente Jovem (na Secretaria da Assistência Social) e o Auxílio-Gás (2002). Posteriormente, foram acoplados o programa Bolsa-Escola em 1998 e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Na Argentina, houve uma proliferação de políticas focalizadas de forma que em 1996 o Estado contava com 48 programas sociais destinados a pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade social. Entre os programas focalizados de proteção social/assistência social, cabe atenção especial ao que ficou sob a orientação do Ministro do Desarrollo Social: O Programa de Políticas Sociales Comunitarias (PROSOCO) e o Programa Alimentar Nutricional Infantil (PRANI); o Plan Trabajar I, II, III, que mais tarde se converteria no Plan Jefes e Jefas de Hogar. Para mais sobre o assunto ver Papi (2017).

significativo, mas muito inferior a qualquer outro da série (IPEA, 2015).

No caso argentino, mesmo sem uma densidade institucional⁷ comparável à brasileira (Díaz Langou et al, 2010), os governos de centro-esquerda (Nestor e Cristina Kirchner) avançaram na institucionalização de políticas não contributivas a partir do programa Asignación Universal por Hijo (AUH)⁸, criado em 2009.

Apesar de se tratar de um programa de transferência de renda, o AUH tornou-se uma iniciativa de proteção social das mais relevantes nas últimas décadas, avançando-se em um piso de proteção social no país ao garantir um repasse mínimo para cerca de dois milhões de famílias argentinas. Os impactos do programa implicaram na redução nos índices de pobreza, indigência e desigualdade de renda no país (Repetto & Díaz Langou, 2010). Além de seu impacto na situação social dos setores mais vulneráveis, a AUH também significou a unificação parcial dos programas de transferências condicionadas (PTC) relevantes que se implantaram no país. Pode-se sustentar que se constituiu como um possível pilar para a construção de um incipiente sistema de proteção social (SPS) da Argentina. Apesar de ser um modelo não tão abrangente como o brasileiro, as medidas de proteção social não contributivas, somadas às ações voltadas à recuperação do emprego na Argentina resultaram em indicadores sociais melhores que os dos anos 1990. Com a chegada dos presidentes Kirchner à presidência, embora sem um acordo sobre os números exatos das mudanças, a pobreza parece ter diminuído, o emprego crescido e melhorado o acesso à educação. De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (INDEC), enquanto no ano de 2001, quando a Argentina enfrentou uma crise econômica de grande magnitude, mais de 54% da população vivia na pobreza, ao final de 2012 apenas 5,4% dos 40 milhões de argentinos eram pobres.

Sobre a taxa de desemprego em aglomerações urbanas, de acordo com o INDEC, esta caiu de 20,4 em 2003 para uma taxa de 7,1 em 2015 (INDEC, 2020).

Dada a característica cíclica das experiências político econômicas nos dois países, especialmente quanto a opções ora reguladoras, ora liberalizantes, se nos anos 2000 Brasil e Argentina avançavam na edificação de estruturas de proteção social em moldes mais inclusivos, com a onda conservadora que emplacou nos países a partir da eleição de Macri e Bolsonaro, o modelo de Estado e de políticas sociais foi posto em xeque.

3. Os governos liberais/conservadores e a desconstrução de um caminho incompleto

Assim como houve sincronia nos países latino americanos que, no virar do século XXI, elegeram na maioria dos países governos ligados ao espectro centro-esquerda, a partir dos anos 2015 uma nova onda sincrônica voltou atingir a América Latina, porém trazendo de volta a política liberal e conservadora para a região. Iniciando-se pelas eleições de Mauricio Macri na Argentina em 2015; de Sebastián Piñera no Chile, Lenín Moreno no Equador e Ivan Duque na Colômbia, este último eleito pelo Centro Democrático, recém-criado partido de direita que se consolidou em oposição ao ex-presidente Juan Manuel Santos e ao acordo de paz com as FARC; culmina em 2018 com a eleição de Jair Bolsonaro no Brasil.

A nova onda conservadora latino-americana reflete mudanças econômicas e políticas internacionais, como a queda do preço das commodities, a revalorização do projeto neoliberal e das políticas fiscais típicas da cartilha imposta nos anos 1990 pelo Consenso de Washington na região; a eleição de Donald Trump (EUA) e a ascensão de uma política conservadora e nacionalista em âmbito mundial, que mais uma vez parece indicar um mo-

7. Conforme demonstra Langou, a fragmentação institucional não foi facilmente superada neste período, de forma que determinados programas de transferência condicionada de renda foram distribuídos entre o MDS e o MTEySS – ficando aqueles mais relevantes em termos de cobertura e orçamento, sob a responsabilidade do MTEySS. Ademais, o programa “Argentina Trabaja”, que busca reincorporar ao trabalho, trabalhadores que formam parte de cooperativas, ficou sob condução do MDS, sendo utilizado como moeda de troca política e associado a visões assistencialistas (Díaz Langou et al, 2010).

8. a AUH é um benefício destinado aos filhos menores de 18 anos de pessoas desocupadas ou que trabalham no mercado informal e ganham menos de um salário mínimo mensal e também aos monotributistas sociais uma contribuição tributária simplificada para trabalhadores em situação de vulnerabilidade, para que possam ser regularizados, e aqueles incorporados ao Regime Especial de Seguridad Social para Empleados Domésticos e que recebam menos de um salário mínimo. O benefício também se destina a famílias com pessoas com algum tipo de deficiência. O valor transferido atualmente é maior: 1.500 pesos por família por mês contra 460 pesos mensais para as famílias do primeiro perfil.

vimento de chutar a escada dos países periféricos (Chang, 2004). Os princípios morais dessa política incluem um retorno aos valores conservadores, especialmente com foco na família, um questionamento da laicidade dos Estados, com a emergência de governos de políticos com base de sustentação religiosa, eleições com grande apelo ao uso de *fake news* e críticas à imprensa livre, amparados em uma renovação da lógica macartista da guerra fria, de perseguição a projetos populares e a partidos de esquerda.

Na área social, o questionamento dos avanços também foi posto em função de algumas condições externas e internas em andamento: as mudanças no contexto internacional, especialmente com a queda no crescimento de países emergentes e a manutenção da vulnerabilidade econômica da região, que implicaram em retrocessos no efetivo investimento em qualidade dos serviços públicos (Larrea, 2015).

Na Argentina a eleição de Macri em 2015, marcou a preferência da população por um projeto declaradamente liberal, depois de anos do Kirchnerismo. Com efeito, desde 2011 a Argentina passou a experimentar problemas no setor externo que afetaram negativamente o desempenho da economia, trazendo de volta a inflação e emplacando os argumentos liberais acerca da necessidade de reformas econômicas e do Estado para “volver ao mundo” e fazer a economia voltar a crescer (Freitas e Crespo, 2018). Macri promoveu inicialmente uma reforma na burocracia do Estado, cercado-se funcionários ligados ao setor privado (Carmona, 2018), promoveu também reformas econômicas embasadas na desconstituição dos controles regulatórios criados durante os governos kirchneristas, a partir de medidas que promovessem uma maior abertura da economia com a liberalização financeira, cambial e do comércio exterior. Porém as medidas de liberalização e flexibilização do Estado não surtiram resultados imediatos. Houve queda do PIB no primeiro ano do mandato presidencial em 1,8%, a desvalorização cambial levou ao aumento nas tarifas públicas que provocaram uma grande queda do poder aquisitivo da população e, na sequência, elevação da inflação, em especial

nos preços dos alimentos (Gaitán, 2019; Freitas & Crespo, 2018). Com isso a taxa de desemprego voltou a crescer na Argentina em aproximadamente 30%, passando de 6,5% em 2015 para 8,5% em 2016 (INDEC). Nos anos seguintes o desemprego cresceu chegando a 10,1% no primeiro trimestre de 2019 (INDEC). Em concomitância a esse processo, conforme demonstra Gaitán, aumentou o subemprego saindo de uma taxa de 9,8% em 2018 para 11,8% em 2019 (Gaitán, 2019, p.100).

Buscando fazer frente a esse cenário de deterioração do poder aquisitivo e sobretudo do trabalho, principal pilar da proteção social argentina, foram mantidos os principais programas sociais, porém com mudanças vinculando sua essência às perspectivas de mercado, pela via da capacitação (Gaitán, 2019). Enquanto houve ampliação do gasto com prestações sociais, representando 48,4% em 2016, 56,4% em 2017 e 60,8% em 2018 do gasto total, seu efeito foi atenuado pelos indicadores do mercado de trabalho.

Macri criou em 2016 uma pensão não contributiva vitalícia para idosos sem qualquer renda, nos moldes do Benefício de Prestação Continuada (BPC) brasileiro, denominada *Prestación Básica Universal (PBU)*. Apesar de ampliar a cobertura a idosos a 97%, se questiona a imposição de uma lógica assistencial, contribuindo para a segmentação de direitos entre aqueles que dependem de benefícios contributivos e os inseridos nas políticas não contributivas. O reconhecimento do trabalho informal e doméstico e sua equiparação com os direitos dos trabalhadores formais teria aproximado a seguridade social da lógica focalizada e assistencialista na opinião de Gaitán (2019).

Também nos programas de transferência de renda houve manutenção da fragmentação dentre programas dirigidos a filhos de trabalhadores formais e aqueles orientados a filhos de informais, apesar da ampliação da cobertura do AUH a filhos de famílias autônomas, com rendas mais baixas antes não contemplados, o que resultou no aumento do número de beneficiários. A visão quanto aos efeitos produzidos é da produção de “un formato de políticas sociales que parece más

cercano a la visión asistencialista que a un enfoque de derechos, agravada por “problemas de gestión”. A pesar que no se han desactivado los pilares de políticas, la narrativa se basa en la asistencia como paliativo frente a una situación de desempleo entendida como anómala y transitoria.” (Gaitán, 2019, p. 101).

No Brasil, após a destituição da Presidenta Dilma Rousseff por impeachment em 2015, seu vice Michel Temer assumiu com uma agenda liberal voltada a melhorar o clima de negócios a partir da desregulamentação econômica, diminuição do gasto público, como forma de promover o ajuste fiscal. Assim como no caso argentino, a fórmula pautada na ortodoxia econômica⁹ não levou aos resultados esperados levando o país, que não estava em crise severa em 2014, a uma grave recessão, com dois anos seguidos (2015-16) de queda da atividade econômica em torno de 3,5% do PIB (Fagnani, 2017).

A recessão foi funcional para aplicação das políticas liberais que tiveram como eixos principais as reformas trabalhista e previdenciária. A reforma trabalhista alterou mais de 21 tópicos da antiga Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), permitindo fundamentalmente a terceirização para atividades fins, o aumento da jornada semanal de trabalho; a permissão para o trabalho diário de 12 horas por um período determinado; o fim da regra de valorização do salário mínimo; prevalência do “negociado sobre o legislado” (Lei N° 13.429/2017); entre outras flexibilizações que precarizam as relações trabalhistas. A reforma da previdência alterou a idade mínima de aposentadoria e aumentou o tempo de contribuição, assim como aumentou a idade mínima para acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 65 para 70 anos, um benefício garantido constitucionalmente a idosos e pessoas com deficiência no Brasil.

Juntamente com essas reformas, duas ações afetaram diretamente a capacidade de consolidar e expandir o incipiente EBS brasileiro: 1) a proposta de emenda constitucional (PEC 241/2016, consolidada na PEC 95/2019) que conseguiu congelar o aumento de gastos públicos pelos 20 anos seguintes¹⁰ e, 2) a Emenda Constitucional n. 86 de 2015 em que se desvincularam gastos com educação e saúde modificando a garantia de estabilidade do financiamento do SUS desde 2002 e fragilizando a possibilidade de aprimoramento do sistema frente às demandas públicas por atenção emergencial, por exemplo.

Em face à crise econômica associada e à baixa intencionalidade do Estado em investir em políticas sociais, os indicadores sociais sofreram severa deterioração nos anos que se seguiram, de forma que chegamos no quarto trimestre de 2019 com um total de 11,6 milhões de desempregados, chegando a uma taxa de 10,6% e 4,6 milhões de desalentados (aqueles que desistem de procurar emprego por algum motivo e dependem de auxílios do Estado). De 2016 para cá aumentou o número de pessoas a viver com menos de R\$ 406 por mês. Em 2016 o país tinha 54,8 milhões de pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza e em 2017 dois milhões a mais. Isso significa que a proporção da população em situação de pobreza subiu de 25,7% para 26,5%, de acordo com a Síntese de Indicadores Sociais (IBGE, 2017). Em 2018 esse índice caiu para 25,3%, porém, o percentual está longe do alcançado em 2014, o melhor ano da série, que registrou 22,8% da população brasileira.

O quadro de deterioração social, somado às alterações constitucionais contribuem para desconstituir o incipiente EBS brasileiro em seu pilar contributivo e a capacidade das políticas públicas atenderem às demandas sociais.

9. Essa fórmula se pauta na ideia de se colocar a inflação no “centro da meta” econômica pelo desaquecimento da demanda. Mantem-se a taxa real de juro elevada, se avança no corte de investimentos e gastos sociais, no desemprego e rebaixamento da renda do trabalho são funcionais para esse objetivo (Fagnani, 2017)

10. Esse congelamento afetará diretamente o financiamento de políticas sociais como a educação, saúde e assistência social. Conforme assevera Fagnani (2017: 12), “o propósito é reduzir a despesa primária do governo federal, de cerca de 20% para 12% do PIB entre 2017 e 2036, aproximando o Brasil do patamar de gastos realizados por diversos países africanos”.

Esse cenário se agrava ainda mais no que tange ao pilar não contributivo. É o caso da assistência social que desde o início do governo Temer passou a ser fragilizada a partir de duas frentes: modificando-se a estrutura do Ministério de Desenvolvimento Social e combate à fome (MDS), que passou a dividir sua estrutura física e financeira com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), passando a se chamar Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (de MDS para MDSA); e com a criação do programa Criança Feliz da primeira dama Marcela Temer, que além de trazer de volta a figura das primeiras damas para a gestão dos programas de assistência social, deslocou recursos que seriam voltados ao fortalecimento do SUAS. Segundo nota técnica da Confederação Nacional dos Municípios (2017), entre os anos de 2016 e 2017, houve um corte de 19% para área da assistência social, indicando a inversão de prioridades advinda com aquele programa. O PCF teve uma previsão orçamentária em 2017 de R\$ 1 bilhão, porém só implementou 435 milhões de reais em 2018, enquanto a AS entre 2016 e 2017 deixou de receber R\$ 471 milhões entre estes anos.

Com o governo Bolsonaro o quadro de desvalorização simbólica da assistência social avançou iniciando-se pela reorganização institucional e pelas escolhas da burocracia de alto escalão. Já no início de seu governo o presidente eliminou o MDS e instituiu o Ministério da Cidadania que congregou duas outras pastas: o esporte e a cultura. Com isso, o Ministério de Desenvolvimento Social ficou reduzido a uma secretaria, conforme organograma do governo, dividindo não apenas recursos orçamentários, departamentos, servidores, mas o projeto de desenvolvimento social que vinha sendo priorizado nos governos anteriores.

A partir desse contexto nacional, as gestões locais de assistência social passaram a receber menor apoio federal para consolidação do SUAS, inclusive do ponto de vista simbólico. Desta forma, o avanço da proteção social não contributiva, realizada pela AS, sobretudo por meio de atenção básica voltada às famílias em vulnerabilidade, voltou a ficar a cargo da priorização ou não pelos municípios, confor-

me sua agenda política. Com isso, como mostram alguns casos analisados na Região Metropolitana de Porto Alegre (Papi et al, 2019), equipes passaram a ser desfeitas, equipamentos públicos fechados e serviços foram fragilizados para atender a crescente demanda social que se aprofundou com a crise de 2014. Esse cenário revela-se agravado no atual contexto de pandemia, visto que a política de assistência social foi escolhida pelo governo federal como uma das poucas medidas a atuar junto com a saúde no combate aos efeitos econômicos e sociais da doença.

Reflexões finais: desafios atuais da proteção social diante da crise do coronavírus

A contingência humanitária que o coronavírus impôs ao mundo, revelou como as políticas públicas são fundamentais para mitigar os efeitos por ele provocados. Dados recentes divulgados sobre o perfil da doença COVID-19 (Ahmed et al, 2020)) mostram que, para além da questão etária e das comorbidades de saúde que compõem o chamado grupo de risco, são potencialmente afetados àqueles pertencentes a grupos populacionais mais vulneráveis incluindo negros, imigrantes e pobres, populações tradicionais, em razão do acesso limitado a condições de vida como moradia, segurança alimentar e serviços sanitários e de saúde adequados.

Este panorama traz à tona a necessidade de se pensar sobre a importância da consolidação de sistemas de proteção social e sua capacidade de dar respostas aos dilemas humanitários como revelam os casos de Brasil e Argentina. Apesar da crise ter testado especialmente os sistemas de saúde, o desemprego decorrente de medidas de isolamento social, e a pobreza agudizada pela falta de capacidade de gerar recursos com atividades informais, pressionaram os Estados e seus sistemas de proteção social. Estudos como de Tavares, Silveira e Paes Souza (2020) revelam que o tempo de resposta, suficiência, coerência e coordenação são essenciais para o sucesso de políticas de proteção social no combate à COVID-19. Beck et al (2020) aponta a importância da setorialidade na gestão da pandemia. Porém a estruturação dos sistemas de proteção social prévios e a coalizão

político partidária parecem ser cruciais para gerenciar a crise como mostram os casos analisados.

Na Argentina, a manutenção de um modelo de proteção social situado no grupo dos países de maior e melhor cobertura, a despeito de um último mandato de governo de tendência liberal, parece ter sido crucial tanto para o retorno via eleições a um governo de base social, quanto para a condução acertada e com ampla legitimidade na gestão da pandemia. Desde 12 de março de 2020 o governo de Alberto Fernandez ampliou o escopo da emergência pública, declarada no final de dezembro de 2019, para incluir a emergência sanitária causada pela COVID-19. A partir de então, contando com coordenação política (apoio no congresso) e social decretou, em 20 de março, isolamento social drástico e fechamento de fronteiras.

Entre as medidas de proteção social com enfoque na preservação do emprego e da renda, destacou-se o reforço a Programas de apoio a pessoas vulneráveis, como pensões por idade e invalidez, mediante concessão de bônus extraordinários, de no máximo 3 mil pesos, pagos uma única vez e a criação da Renda Familiar de Emergência, direcionada a cidadãos que estejam desempregados ou que atuem na economia informal (Tavares, Silveira & Paes Souza, 2020, p. 119) ambas as medidas foram editadas em 24 de março de 2020. Em 31 de março proibiu, por sessenta dias, demissões sem justa causa no país ou com base em falta ou diminuição da força de trabalho (Ibidem). A essa ação seguiu-se a implementação do Programa de Assistência Emergencial ao Trabalho e à Produção em 1º de abril de 2020, que normatizou a redução ou postergação de até 95% do valor das contribuições patronais, concessão de compensação salarial para empresas de até cem trabalhadores, e de benefício de emergência sanitária para trabalhadores de empresas com mais de cem trabalhadores (Ibidem).

No Brasil elementos para além das características e padrões do sistema de proteção social têm contribuído com as diferentes tragédias causadas pela doença e pela forma de lidar com ela por parte do governo federal. Essas tragédias revelam-se na cisão social entre aqueles que creem na ciência e acreditam na seriedade e potencial de contágio e risco da doença versus uma parcela significativa da população, de seguidores do Presidente da República, que consideram o Coronavírus uma "gripezinha" e boicotam as medidas sanitárias impostas pelo antigo Minis-

tro da Saúde, por governadores e prefeitos, seguindo-se as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Desta forma, se iniciamos o processo de contenção do avanço da doença "em tempo", já que em 03 de fevereiro, trinta e três dias após a notificação inicial da China, o Ministério da Saúde do Brasil declarou estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (e o confinamento social a partir de 06 de março), por outro lado, desde então parte da sociedade civil, em especial os pequenos e médios empresários pedem o fim do confinamento social e a flexibilização das medidas de isolamento social horizontal. Desta forma, se na Argentina percebe-se uma maior coordenação entre sociedade civil, Congresso e o chefe do Executivo, no Brasil há, não apenas conflito, mas um tensionamento que acabou por derrubar o Ministro da Saúde (Luis Henrique Mandetta) em 16 de abril e por jogar ao STF a definição de competências quanto à decretação de medidas de isolamento, com ganho por parte de governadores e prefeitos.

Outro problema enfrentado no caso brasileiro foi a demora na implementação de medidas de proteção social. Em que pese as medidas de retenção do emprego e de alívio financeiro e de impostos a empresas (em especial o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e as medidas de disponibilização de crédito ao setor empresarial) tenham sido tomadas com brevidade, as medidas de extensão da proteção social, com destaque para a ampliação da caracterização da situação de vulnerabilidade social para elegibilidade ao benefício de prestação continuada (BPC) e para a instituição do auxílio emergencial no valor de R\$ 600,00 ao trabalhador demoraram a ser implementadas de forma que boa parte da população mais vulnerável não conseguiu (ainda hoje) acessar o benefício e continua promovendo aglomerações em filas de banco por todo o país.

Todos esses fatores, somados aos constrangimentos impostos por períodos de desconstrução do sistema de proteção social e das políticas sociais contributivas e não contributivas afetaram o processo de implementação de medidas de emergência. Nesse sentido, para além desses efeitos desastrosos sobre a população em termos de número de mortos, de pessoas adoecidas, dos níveis elevados de hospitalização, bem como do fosso de subnotificação, dada pela falta de testes e de condições estruturais para lidar com doentes e mortos, o Brasil começa a sentir os efeitos políticos.

Ao longo dos últimos 50 dias, enquanto menos da metade da população consegue cumprir medidas de isolamento social, seja pelas condições de vida e de trabalho impostas, seja por descrença, vivemos sob constantes ameaças de ruptura democrática, dadas por manifestações e apoio presidencial a atos defendendo intervenção militar, fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, somadas a alterações na alta burocracia que em nada contribuem com a emergência da gestão da pandemia. Saberão os brasileiros copiar a Argentina e

a demonstrar que tal forma de (não) lidar com a coisa pública e com a vida de seus cidadãos merece um desfecho semelhante ao demonstrado por eles nas urnas? Enfim, as escolhas sobre as políticas públicas em curso no contexto da pandemia terão algum peso nas escolhas políticas dos próximos governos?

Se as políticas públicas também fazem a política, o fenômeno da pandemia será paradigmático para o futuro político de Brasil e Argentina.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arcidiácono, P. (2012). "Políticas sociales y bienestar en Argentina 2002-2009. Entre el trabajo asalariado y los programas sociales". *Revista SAAP*, Vol. 6, N° 2.
- Barrientos, A. & Hinojosa-Valencia, L. (2009). A review of Social Protection in Latin America. Sussex: Centre for social Protection – IDS.
- Barrientos, A. & Santibáñez, C. (2009). "New forms of social assistance and the evolution of social protection in Latin America", *Journal of Latin American Studies*, 41, 1: 1-26.
- Barrientos, A. & Santibáñez, C. (2009b). "Social policy for Poverty Reduction in Lower-income Countries in Latin America: Lessons and Challenges". *Social Policy & Administration*, v. 43, n. 4, Agosto, p. 409-424.
- Barrientos, A., Gideon, J.; Molyneux, M. (2008). "New Developments in Latin America's Social Policy". *Development and Change*, v. 39, n. 5, p. 759-774.
- Beck, A., Bartos, M. & Lotta, G. (2020). "Só a saúde resolve? A urgência de ações inter-setoriais na crise do Covid-19". *Blog Gestão, Política & Sociedade do Estadão* [published 03 Maio 2020]. Available from: <https://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/so-a-saude-re-solve-a-urgencia-de-acoes-intersectoriais-na-cri-se-do-covid-19/>
- Bloch, M. (1963). "Pour une histoire comparée des sociétés européennes". Em *Mélanges historiques*. Paris: École Pratique des Hautes Études, p.15-50.
- Breckenridge, S.(Eds.) Políticas sociales en América Latina y el Caribe: Escenarios contemporáneos, inversiones y necesidades. Buenos Aires: FLACSO.
- Bulcourn, P. & Cardozo, N. (2008). "Dinámica estatal y políticas públicas: estrategias para la construcción de un modelo de análisis comparado". Em *Nuevo Espacio Público* nro. 1, octubre.
- Campello, T. & Neri, M. (2013). Programa Bolsa família uma década de inclusão e cidadania. Brasília: IPEA.
- Campos, A. (2015). Bem-estar social nos anos 1990 e 2000: traços estilizados da história brasileira. Texto para discussão. Rio de Janeiro: IPEA.
- Carmona, G. (2018). "Intereses en conflicto en tiempos de Macri: La imperiosa necesidad de un nuevo régimen legal frente al fenómeno CEOcrático". Im: García Delgado, D., Del Ferrer, C. (orgs.) Elites y captura del Estado: Control y Regulación en el Neoliberalismo Tardío. Buenos Aires: FLACSO.
- Castel, R. (2003). As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Rio de Janeiro: Vozes.
- Castineiras, N. (2013). "Eva Perón Foundation From Its Beginnings to the Death of Evita". Historical Research Foundation.
- Cecchini, S & Martínez, R. (2011). Protección social inclusiva en América Latina: una mirada integral, un enfoque de derechos. Libro de la CEPAL, n° 111. Santiago: CEPAL.
- Chang, H-J. (2004). Chutando a escada. A estratégia do desenvolvimento em perspectiva Histórica. São Paulo: UNESP.
- Del Valle, A. (2010). "Comparando regímenes de bienestar en América Latina". *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, v. 88, abril, p. 61-76.
- Del Valle, A. (2010b). "Informalidad y modelos de bienestar en América Latina". *Política y Sociedad*, v. 47, n. 3, p. 239-261.
- Di Giovanni, G. (1998). "Sistema de proteção social: uma introdução conceitual". Em: De Oliveira, M. (org.). Reforma do Estado e política de emprego. Campinas: IE/UNICAMP, p.9-29.
- Díaz Langou, G., Forteza, P. & Potenza Dal Masetto, F (2010). "Los principales programas nacionales de protección social. Estudio sobre los efectos de las variables político-institucionales en la gestión", Documento de Trabajo N°45, julio. Buenos Aires: CIPPEC.
- Diniz, E. (2007). Globalização, Estado e Desenvolvimento. Dilemas do Brasil no Novo Milênio. Rio de Janeiro, FGV.
- Draibe, S. & Riesco, M. (2006). "Estado de bienestar, desarrollo económico y ciudadanía: algunas lecciones de la literatura contemporánea". Serie Estudios y perspectivas. México: CEPAL -.
- Draibe, S. & Riesco, M. (2007). "Latin America: a New Developmental Welfare State in the Making?" Em Riesco, M. Latin America: A New Developmental Welfare State Model in the Making? Nova Iorque: Palgrave Macmillan/UNRISD, p. 21-113.
- Draibe, S. & Riesco, M. (2009). "Social policy and Development in Latin America: The Long View". *Social Policy and Administration*, v. 43, n. 4, p. 328-346.
- Draibe, S. & Riesco, M. (2009). El estado de bienestar social en América Latina: una nueva estrategia de desarrollo. Madrid: Fundación Carolina.
- Draibe, S. & Riesco, M. (2011). "Estados de Bem-Estar Social e Estratégias de Desenvolvimento na América Latina: Um Novo Desenvolvimentismo em Geração?" *Sociologias*, vol.13, n.27, Porto Alegre: UFRGS.
- Earp, F. & Kornis, G. (2004). "Desenvolvimento econômico sob Getúlio Vargas". Em: Silva, R. M., Cachapuz, P. & Lamarão, S (orgs.) Getúlio Vargas e seu Tempo. Rio de Janeiro: BNDES.
- Fagnani, E. (2017). "O fim do breve ciclo da cidadania social no Brasil (1988-2015)". *Texto para Discussão* n° 308, jun. Campinas: Unicamp.
- Fausto, B. & Devoto, F. (2004). Brasil e Argentina: um ensaio de história comparada (1850-2002). São Paulo: Ed. 34.
- Fiori, J. (2007). "Olhando para esquerda Latino-americana". Em Diniz, E. (org). Globalização, Estado e Desenvolvimento. Dilemas do Brasil no Novo Milênio. Rio de Janeiro, FGV, p. 97-125.
- Freitas, A. & Crespo, E. (2018). "Da Vitória a Crise: Uma Análise das Políticas Econômicas do Governo Macri (2015-2019)". *Anais XXIII Encontro Nacional de Economia Política*.
- Frey, K. (2000). "Políticas Públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise de políticas públicas no Brasil". *Planejamento e Políticas Públicas*, N° 21 - junho.
- Gaitán, F. (2019). "Actores, coaliciones y cambio institucional: la política social ante la reversión conservadora en Argentina y Brasil". *Desenvolvimento em Debate* v.7, n.1, p.89-111, 2019.
- Isuani, E. (2008). "La Política Social Argentina en perspectiva". Em Cruces, G. (editor) Los programas sociales en Argentina hacia el Bicentenario: visiones y perspectivas. Buenos Aires: Banco Mundial.
- Kerstenetzky, C. (2012) O Estado de Bem-estar Social na Idade da Razão. A Reinvenção do Estado de Bem-estar no mundo Contemporâneo. Rio de Janeiro: Elsevier.
- Larrea, C. (2015). "Políticas sociales y cambio social en América Latina y la Región Andina: Alcances y perspectivas". Em Bonilla Soria, A., Álvarez Echandi, I. ; Saénz Lowí, T. (1972). "Four Systems of Policy, Politics, and Choice". *Public Administration Review*, 32: 298-310.
- Madeira, L., Papi, L., Geliski, L., & Rosa, T. (2020). "Os estudos de políticas públicas em tempos de pandemia". *Blog DADOS* [published 17 April 2020]. Available from: <http://dados.iesp.uerj.br/os-estudos-de-politicas-publicas-em-tempos-de-pandemia/>
- Marshall, T. (1967) Política Social. São Paulo: Zahar.
- Mesa-Lago, C (1996). "Las reformas de las pensiones en América Latina y la posición de los organismos internacionales". *Revista de la CEPAL*, n. 60, Santiago de Chile.
- Mesa-Lago, C. (2003) "A reforma estrutural dos benefícios da seguridade social na América Latina: modelos, características, resultados e lições". Em: Coelho, V. (Org.). A reforma da previdência social na América Latina. Rio de Janeiro: FGV.
- Mesa-Lago, C. (1989). "Financiamiento de la atención a la salud en América Latina y el Caribe, con focalización en el seguro social". Documento de la Serie de Estudios de Seminarios del Indes, n. 42. Washington DC: Banco Mundial.
- Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2014) Censo SUAS 2013. Brasília: SAGI- SNAS.
- Papi, L., Eger, T. & Rosa, T. (2019). "Capacidades estatais na implementação da assistência social na RMPA". *Encontro Brasileiro de Administração Pública*. Salvador: UFBA, 2019. p. 1-16.
- Pribble, J. (2011). "Words Apart: Social Policy Regimes in Latin America". *Studies in Comparative International Development*, v. 46, p. 191-216.
- Pribble, J. (2014). *Welfare and Party Politics in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Przeworski, A., Alvarez, M., Cheibub, J., & Limongi, F. (1997). O que mantém as democracias?. *Lua Nova: Revista de Cultura e Política*, (40-41), 113-135. <https://doi.org/10.1590/S0102-64451997000200006>
- Repetto, F. & Dal Masetto, F. (2011). "Protección Social en la Argentina". Serie Políticas Sociales n° 174 Santiago: CEPAL.
- Santos, W. (1987). Cidadania e Justiça: a política social na ordem brasileira. Rio de Janeiro, Editora Campos, 1987.
- Sposati, A., Falcão, M. do C. & Teixeira, S. (1989). Os direitos (dos desassistidos) sociais. São Paulo: Cortez.
- Tavares, A., Silveira, F., & Paes-Sousa, R. (2020). "Proteção Social e COVID-19: a resposta do Brasil e das maiores economias da América Latina". *Revista NAU Social* - v.11, n.20, p. 111 – 129 Maio.

Sites consultados:

- <https://www.indec.gov.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos>
<https://www.ibge.gov.br/indicadores#desemprego>
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza.html>
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875

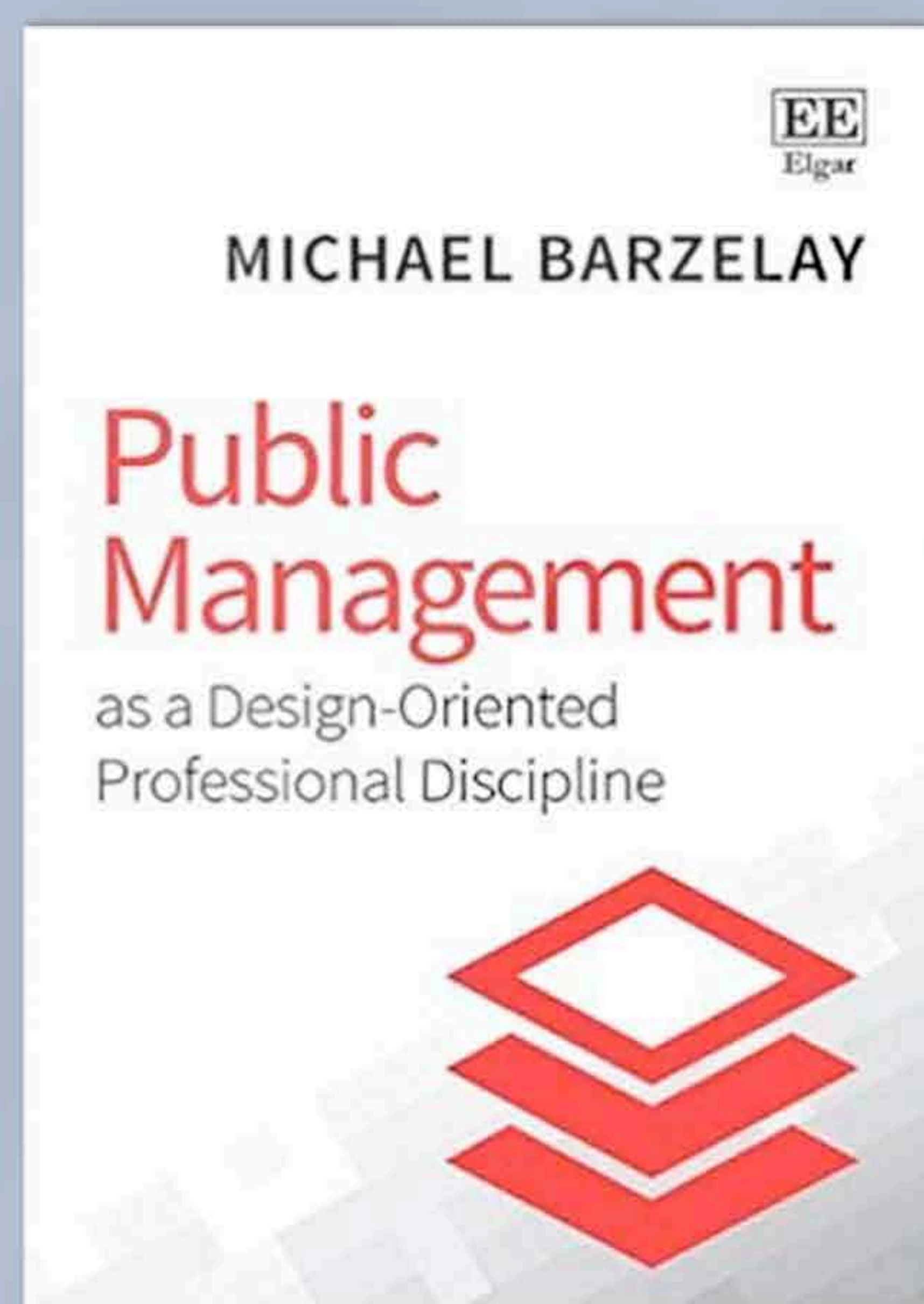
Public management as a Design-Oriented professional discipline

Michael Barzelay

Edward Elgar Publishing Inc. Cheltenham. 2019. 168 páginas

ISBN 978-1-78811-911-5

Por Agustina Pratti



El profesor de management de la *London School of Economics*, nos presenta un nuevo trabajo que continúa la línea de docencia e investigación iniciada hace casi 20 años con *The New Public Management: Improving Research and Policy Dialogue*. La vinculación entre el ámbito de reflexión, enseñanza y práctica es un hilo que se desarrolla a lo largo de los 8 capítulos de este trabajo, estructurados como un "manual" de enseñanza, antes que un libro académico, ya que orientado desde la "mirada del profesor" (p. 8). En este volumen se despliegan diferentes estrategias, como el *story telling*, cuadros conceptuales, entrevistas, dramatizaciones, para llegar de un modo innovador a los estudiantes de las escuelas de gestión pública y académicos. Las preguntas que se responderán a lo largo de las páginas serán: ¿Para qué es la gerencia pública? ¿Cómo funciona? ¿Y, finalmente, en qué consiste?

En el primer capítulo se plantea el enfoque de la obra, su visión de *public management* como una disciplina orientada al diseño. Esta idea intenta "tensionar" la visión esencialmente técnica que se tiene del *management* como una "tecnología administrativa" basada en una racionalidad. La noción de "diseño" permite imaginar posibilidades que remiten a otros campos que históricamente han sido lejanos a la tradición administrativa –como arquitectura, ingeniería, artes escénicas, diseño industrial, entre otras–, fuertemente marcada por el pensamiento de Fayol, Moore and Simon. En esta sección se focaliza la orientación didáctica, pero no solo

orientada a gestores, sino también a profesores e investigadores. A partir de los recursos escénicos y un manejo histriónico recurre a la simulación de una entrevista televisiva donde expone los fundamentos del libro. En la segunda sección se centra en la idea de las organizaciones públicas como creadoras de valor público, defendiendo la concepción del "gerencialismo" como una "práctica" que debe superar la tradición de "Harvard" y sentar las bases para una teoría propositiva orientada al diseño.

El tercer capítulo desarrolla su idea del "diseño conceptual" (conceptual design) y el "diseño incorporado" (*embodiment design*) –a partir de un diálogo entre los profesores donde recurriendo a la mayéutica van definiendo los principales puntos–. Ambos conceptos, buscan mejorar las organizaciones públicas. En la sección siguiente, se simula una visita virtual a la "galería del public management" donde mostrará que la gerencia pública es efectivamente una disciplina (metaforizando con las escuelas pictóricas) con artistas cuyas obras cualquier estudiantes y gestor público debe conocer. En este punto Barzelay se convierte en la voz de una audio-guía de "Public Management Gallery", haciendo un recorrido histórico como el curador de ese espacio con tres niveles: la teoría de las burocracias públicas, la creación de proyectos, y finalmente las actividades profesionales. En este recorrido, aparecen autores y escuelas: Moore de la Harvard Kennedy School con su idea del valor público, Bryson de la Humphrey School of Public Affairs con su concepción del planeamiento estratégico, Simon con su teoría del diseño de proyectos, y finalmente la última sala hace un recorrido la obra de Tilly, Cross, Goffman que representan la escuela de la práctica.

A la pregunta troncal del libro acerca de ¿para qué es el public management? La respuesta de Barzelay es: para crear valor público, (p. 131). A la pregunta, ¿Cómo funciona? Se argumenta que se verbaliza a través de funciones de la administración y resolución de problemas organizacionales. Finalmente, a la pregunta ¿En qué consiste? la contestación es que se trata de una disciplina orientada al diseño destinada a mejorar las organizaciones públicas. En suma, este volumen puede ser mirado con diferentes lentes: Primero, como un manual para funcionarios y capacitadores en función pública, segundo como una obra de análisis metateórico de los fundamentos de la gerencia pública como disciplina, y finalmente, como un manifiesto acerca del carácter terapéutico que debe tener la indagación, innovación y la creatividad a la hora de mirar y resolver los problemas organizacionales en aras ofrecer mejores políticas.

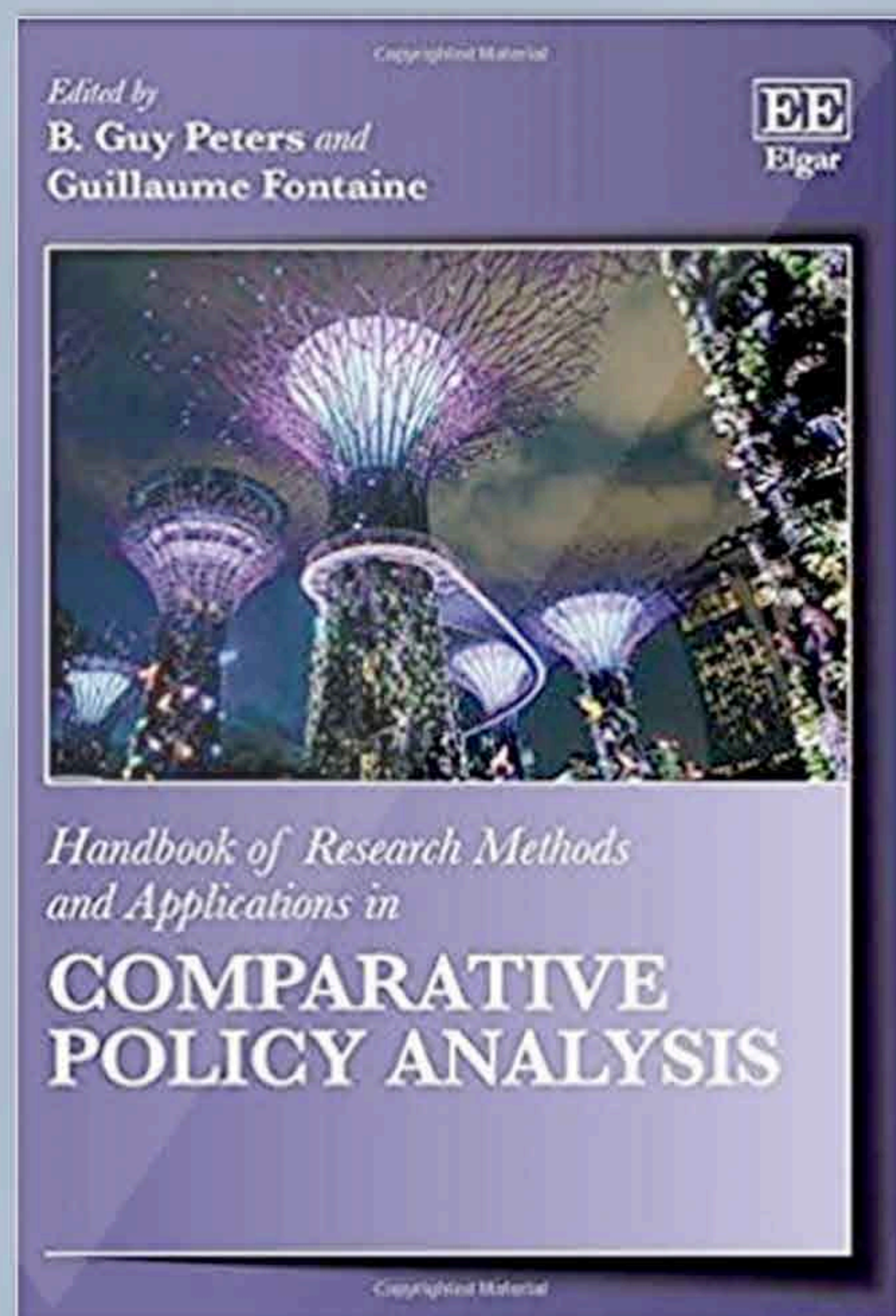
Handbook of Research Methods and Applications in Comparative Policy Analysis

Guy Peters & Guillaume Fontaine (editores)

Editor: Edward Elgar Publishing Ltd. Cheltenham. 2020. 424 páginas

ISBN-13: 978-1788111188

Por Tania Zabala-Peñafiel



Una de las preocupaciones latentes en las ciencias sociales, tiene que ver con la selección de los métodos idóneos para abordar los problemas de investigación; principalmente porque las preguntas e inquietudes investigativas no pueden, ni deben ser abordadas con un mismo método. En particular, el análisis comparado de políticas (CPA por sus siglas en inglés), como área emergente de las ciencias sociales, comparte este desafío, no solo sobre la forma de elaborar diseños de investigación que tomen en cuenta la multiplicidad de métodos y que en su selección sean coherentes, sino también en el empleo de herramientas metodológicas que permitan abordar de manera sistemática la comparación de sistemas más similares y más diferentes.

Con el objetivo de abordar y caracterizar este desafío, el "Handbook of Research Methods and Applications in Comparative Policy Analysis" (2020), editado por Guy Peters y Guillaume Fontaine, postula dos preguntas que son atendidas desde diferentes aristas por los autores que participan en la publicación. A saber, ¿cuáles son los mejores métodos disponibles para realizar un CPA sistemático a través del tiempo, el espacio y las áreas de políticas? Y ¿cómo pueden ser seleccionados y combinados para mejorar la consistencia interna y la coherencia externa del diseño de políticas en investigación y práctica?

Partiendo de ello, el manual reconoce la importancia de los métodos en la investigación y en la práctica de las políticas públicas en perspectiva comparada, y plantea que un adecuado diseño de investigación debe conectar la perspectiva teórica con el método; de forma que sea plausible la confirmación o refutación de las hipótesis de trabajo. Si el CPA ayuda a mejorar el diseño de políticas tanto a nivel teórico como práctico, entonces los métodos empleados tienen que probar de manera comparada ambas implicaciones.

Se considera importante en el análisis, no solo la naturaleza de las políticas, sino sus complejidades dentro de los sistemas políticos, de los subsistemas de políticas, así como a través del tiempo. Luego, la selección de métodos con los que abordar tales complejidades en el campo del CPA, debería evidenciar que no solo los métodos probabilísticos, generan análisis válidos y útiles en el campo de estudio.

El problema de los métodos cuantitativos que priman en los análisis, concretamente en el oficio del CPA, es el desarrollo de explicaciones mediante el empleo de -pocos- métodos; lo que resta potencial a la explicación de los problemas de políticas públicas. En ese sentido, el manual plantea que los métodos mixtos y múltiples son herramientas capaces de proporcionar explicaciones más exhaustivas de las relaciones causales. Asimismo, los estudios de n-pequeña y estudios de caso permiten comprender las políticas y detallar, por lo tanto, las consecuencias de

estas políticas en análisis más individualizados. La naturaleza del objeto de comparación y el desafío de hacer frente a las diferencias entre los sistemas políticos, las áreas de política y los contextos históricos, obligan a los investigadores a considerar diferentes tipos de evidencia; renunciando así al diseño de investigación con un único método.

Respecto al manejo del contexto, los métodos cuantitativos para la comparación normalmente buscan "controlar" los factores contextuales, de tal forma que estos se mantengan lo más estable posibles. Sin embargo, las teorías que buscan comparar políticas, involucran factores contextuales directamente en el análisis, y para ello los diseños de investigación se justifican en términos de sistemas más similares o más diferentes. Aún más, el análisis de caso desarrolla un examen exhaustivo de los factores contextuales que determinan la dinámica de las políticas. Por lo tanto, factores como la economía, la política, la cultura, la estructura social, deben incluirse en los análisis para explicar cómo condicionan a las opciones de políticas y los efectos de estas políticas en una sociedad.

Asimismo, en la práctica de las políticas públicas, especialmente en lo que se conoce como "formulación de políticas basadas en evidencia", se plantea el empleo de evidencia de un contexto específico para informar el diseño de políticas en otros contextos. En ese sentido, partiendo de que los métodos no deben ser asumidos como instrumentos neutros produciendo resultados "correctos", la diversidad de métodos tiene sus propios prejuicios y puntos ciegos. Lo que importa entonces es en qué condiciones se usan y si se aplican adecuadamente. Por ello, una elección consciente de los métodos es importante en el sentido de aportar validez y contundencia a los hallazgos.

En relación con la selección de casos, varios capítulos del manual la abordan como un paso crucial que garantiza una buena investigación comparada. En efecto, en un diseño de investigación comparado en donde no se ha seleccionado los casos de manera rigurosa, es bastante probable que los conceptos no "viajen" como se espera (Sartori 1970). Esto implica un problema en la medición de esos conceptos, ya sea cualitativa o cuantitativa.

La diversidad de enfoques, tanto como métodos con los que se trabaja en CPA, confirma que no hay "una" mejor manera de realizar un CPA sistemático, y esto precisamente es lo que se destaca a lo largo del Manual que organiza los contenidos en seis partes. La primera parte se enfoca precisamente en el debate metodológico actual en el campo de las ciencias sociales que interesa al CPA. La segunda parte se basa en las tendencias contemporáneas en los métodos y agendas de investigación de algunos marcos analíticos importantes, relacionados con la comparación y la causalidad en los estudios de políticas. La tercera parte revisa el problema de las mediciones y experimentos en CPA. La cuarta parte aborda los métodos mixtos y múltiples en los diseños de investigación de CPA. La quinta sección presenta técnicas cualitativas empleadas cada vez con mayor frecuencia en CPA. Por último, la sexta parte aborda reflexiones acerca del desarrollo del CPA y el debate metodológico del mismo.

Finalmente, este manual proporciona una descripción y evaluación completa de los métodos vigentes y disponibles en CPA, rescatando el uso cada vez más frecuente de métodos experimentales y el desarrollo general de técnicas cualitativas de investigación, como aspectos que enriquecen el debate metodológico y la comprensión de las políticas a través del estudio de su proceso.

Políticas Públicas. Questões teórico-metodológica emergentes

Luciana Leite Lima y Leticia María (organizadoras)
 Editora de la UFRGS/CEGOV. Porto Alegre. 2020. 412 páginas.
 ISBN: 978-65-5725-002-0

Por Pablo Navarro Urquiza



Esta obra colectiva nos introduce al campo de las políticas públicas desde la intercepción de varias perspectivas de análisis, reflexionando sobre las diferentes facetas que se pueden presentar, tanto desde un punto de vista analítico, geográfico y problemático. Abriendo por lo tanto varios frentes que resultan enriquecedores desde un punto de vista tanto global como crítico reflexivo.

Desde el plano teórico se indaga tanto sobre la dinámica del Estado y del espacio público como desde el mismo proceso de políticas públicas, algo no muy frecuente en estudios que a su ven realizan análisis empíricos concretos. Es ahí donde el capítulo de André Marengo nos provee de un marco general de referencia que interroga al resto del libro y le otorga una riqueza especial y de un hilo conductor de sentido. A su vez esto se articula especialmente con el segundo trabajo centrado en los modelos de coaliciones con el aporte de Ligia Mari Madeira, Leornado Geliski, María Cabral Juliano y Kalita Hilário Trindade. Entre algunas de las tradiciones más específicas que se rescatan encontramos la obra de Pierre Muller, con el aporte de Catia Grisa en el tercer capítulo.

Uno de los elementos centrales del libro es la incorporación de la perspectiva de género, algo central hoy en día. Esto se expresa específicamente en el tercer y décimo quinto capítulos con los trabajos de Valéria Calvi, Soraya Vargas Cortes y Ximena Chavez.

La compilación analiza, en sus capítulos empíricos, el campo de políticas públicas de Brasil en lo general y de Rio Grande do Sul en el aspecto subnacional, a partir de estudios focalizados en áreas temáticas específicas como también en el estudio de las burocracias públicas. Estas últimas ocupan un espacio de especial interés en el capítulo quinto; Natalia Massaco Koga, Rafael Rocha Viana y también en el ya mencionado décimo quinto; lo que nos permite indagar en un cruce fértil con el aporte del feminismo.

La implementación de políticas públicas es uno de los ejes centrales del libro. Teniendo cuatro capítulos que lo abordan desde diferentes facetas, tanto desde el estudio empírico como desde la reflexión teórica. Ahí Ramao Correa, Marilia Pata Ramos, Bianca Burdini Mazzei, Marta Ferreira Santos, Leticia Maria Schabbach, Martins y Davide Carbonai presentan una visión robusta de uno de los aspectos centrales del proceso de políticas públicas.

El estudio de la economía creativa, el nivel internacional de las políticas públicas y otros aspectos del estudio focalizado de políticas se expresará en los trabajos de Mariana Willmersdorf, Claudia Tirelli, Rafael Barbosa, Luciana Leite, Denis Rodrigues, Lizandro Lui y Luciano D'Ascenzi.

No encontramos por lo tanto con un libro que nos brinda un aporte sustantivo para comprender y reflexionar sobre las políticas públicas en el Brasil que extiende su mirada hacia el propio campo de conocimiento.

ARTÍCULOS

Se reciben manuscritos originales en castellano/español, portugués e inglés que sean producto de una investigación o bien, ensayos de reflexión sobre temas de Estado, políticas públicas, gobernanza, servicio civil, de preferencia con un abordaje comparativo. Deberán tener una extensión de entre 12.000 y 15.000 caracteres con espacios, incluyendo resumen (de hasta 1000 caracteres) y palabras clave (hasta 5).

En lo posible, se debe limitar al mínimo indispensable la extensión de las citas textuales y las notas al pie. Asimismo, la bibliografía debe contener únicamente las referencias citadas a lo largo del texto.

Todos los manuscritos deben ser enviados por correo electrónico a gippc.alacip@gmail.com.

FORMATO

Formato DOC, DOCX, RTF; tamaño de página A 4; interlineado 1,5; fuente Times New Roman 12, sin justificar.

CV RESUMIDO

Hacia el final del documento agregar un cv resumido de cada autor/a que indique, en no más de 4 renglones, la siguiente información (a modo de ejemplo): Títulos de grado y posgrado y nombre completo de la institución otorgante; organismo donde se desempeña; centro de investigación al que pertenece, si corresponde; actividad docente; áreas de investigación, etc.

CITAS

La citación de fuentes se basa en el estilo bibliográfico APA (o autor-año) para la confección de citas y referencias.

Las referencias se colocan en el cuerpo del texto, entre paréntesis (no como nota a pie de página). Los datos que se incluyen aquí son: apellido del autor, año de edición, página/s en la/s que se encuentra el texto citado. Ej: (García, 1998: 75).

CITAS DIRECTAS O TEXTUALES

Las citas directas deben ir entre comillas (no en cursiva).

Ejemplo 1: "....." (García, 1998: 75).

Ejemplo 2: Para García (1998: 55) los temas de interés en materia de investigación y políticas públicas "....."

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

La lista se compone en orden alfabético. Se detallan a continuación las fórmulas de uso habitual elaboradas por la APA, acompañadas de ejemplos: es importante respetar la puntuación y el uso de cursivas cuando corresponde.

Libros:

Autor, A. A. (1967). Título del trabajo. Lugar: Editorial.

Autor, A. A. (1967). Título del trabajo. Recuperado de <http://www.xxxxxxxx>

Capítulos de libro:

Autor, A. A. (1995). Título del capítulo. En Nombre y Apellido del Compilador (Comp./Dir./Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Lugar: Editorial.

Autor, A. A. (1995). Título del capítulo. En Nombre y Apellido del Compilador (Comp./Dir./Ed), Título del libro (pp. xx-xx). Recuperado de <http://www.xxxxxxxx>

Publicaciones periódicas:

Autor, A. y Autor B. (año). Título del artículo. Título de la publicación, volumen(número), pp-pp. (si corresponde: Recuperado de <http://www.xxxxxxxx>)

En cursiva se indica el volumen, si lo tuviera, y luego sin espacio, entre paréntesis y en redonda, el número de la revista.

Tesis:

Autor, A. (año). Título de la tesis (Tesis doctoral/Tesis de maestría), Institución, Ciudad, País. (si corresponde Recuperada de <http://www.xxxx.xxx>)

Documento o informe gubernamental:

Nombre de la organización (Ej. Ministerio de Economía). (año). Título del informe. Nro. de publicación si existe. (si corresponde: Recuperado de <http://www.xx.xxx>)

Artículo de diario en línea:

Autor, A. (día, mes, año). Título del artículo. Nombre del periódico. Recuperado de <http://www.xx.xx>

RESEÑAS
DE LIBROS

Las reseñas deberán comprender libros de no más de un año de antigüedad desde su lanzamiento. Se deberá indicar en el encabezado: Título de la obra, autor/a o coordinadores/compiladores; Editorial, Ciudad, cantidad de páginas, ISBN y nombre y apellido del autor. La extensión deberá ser desde 3.000 a 6.000 caracteres con espacios, y se deberán enviar en formato DOC, DOCX, RTF; tamaño de página A 4; interlineado 1,5; fuente Times New Roman 12, sin justificar. Las referencias se colocan en el cuerpo del texto, entre paréntesis (no como nota a pie de página), indicando el número de página/s en la/s que se encuentra el fragmento citado. Ej: (p. 75). No se deben incluir referencias a otros textos.

TESIS

Se reciben informes de tesis de maestría y doctorado dentro del campo del área de Estado y Políticas Públicas que no tengan más de un año desde su defensa. La extensión de esta comunicación será de entre 3.500 y 6.500 caracteres con espacios. Se deberá indicar en el encabezado: Título de la tesis, autor/a, director/a, institución y grado para el cual fue presentada. El formato del archivo debe ser DOC, DOCX, RTF; tamaño de página A 4; interlineado 1,5; fuente Times New Roman 12, sin justificar.

ARTIGOS

Os manuscritos originais podem ser submetidos em espanhol, português e inglês. Se aceitam produtos de pesquisas ou ensaios de reflexão sobre temas de Estado, políticas públicas, governança, serviço público, de preferência com uma abordagem comparativa. A extensão deverá ser de no mínimo 12.000 e no máximo 15.000 caracteres com espaços, incluindo o resumo (até 1.000 caracteres) e palavras-chave (até 5).

Na medida do possível, as citações textuais e as notas de rodapé devem ser limitadas ao mínimo necessário. Da mesma forma, a bibliografia deve conter apenas as referências citadas ao longo do texto.

Todos os manuscritos devem ser submetidos por e-mail para gippc.alacip@gmail.com.

FORMATO

A submissão do artigo deve se fazer num arquivo em formato DOC, DOCX, RTF; tamanho da página A 4; Fonte Times New Roman 12; com espaço 1,5, e sem justificar.

CV RESUMIDO

Ao final do documento, se deve adicionar um CV resumido de cada autor/a, indicando, no máximo em 4 linhas, as seguintes informações (a título de exemplo): título de graduação e pós-graduação e o nome completo da instituição; organização onde trabalha, centro de pesquisa a que pertence, se for o caso; atividade docente, áreas de pesquisa, etc.

CITAÇÕES

A citação de fontes é baseada no estilo bibliográfico APA (ou autor-ano) para a preparação de citações e referências.

As referências são colocadas no corpo do texto, entre parênteses (não como nota de rodapé). Os dados aqui incluídos são: sobrenome do autor, ano de publicação, página(s) em que se encontra o texto citado. Ex: (García, 1998: 75)

CITAÇÕES DIRETAS
OU TEXTUAIS

As citações diretas devem ser inseridas entre "aspas duplas" (não em itálico). Exemplo 1: "....." (García, 1998: 75).

Exemplo 2: Para García (1998: 55) os tópicos de interesse na investigação em políticas públicas "....."

REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

A bibliografia se deve colocar no final do artigo em ordem alfabética, seguindo os critérios bibliográficos APA que se seguem. É importante respeitar a pontuação e o uso do itálico quando seja apropriado.

Livros:

Autor, A. A. A. (1967). Título do Livro. Local: Editorial.

Autor, A. A. A. (1967). Título da obra. Recuperado de <http://www.xxxxxxxx>

Capítulos de livros:

Autor, A. A. A. (1995). Título do capítulo. Em Nome e Sobrenome do compilador (Comp./Dir./Ed.), Título do livro (pp. xx-xx). Local: Editorial.

Autor, A. A. A. (1995). Título do capítulo. Em Nome e Sobrenome do compilador (Comp./Dir./Ed), Título do Livro (pp. xx-xx). Recuperado de <http://www.xxxxxxxx>

Publicações periódicas:

Autor, A. e Autor B. (ano). Título do artigo. Título da publicação, volume (número), pp-pp. (se for aplicável: Recuperado de <http://www.xxxxxxxx>)

O volume deve ser indicado em itálico, se houver, e depois sem espaço, entre parênteses, o número da revista.

Tese/ Dissertação:

Autor, A. (ano). Título da tese (Tese de Doutorado/dissertação de Mestrado), Instituição, Cidade, País. (se for aplicável: Recuperado de <http://www.xxxx.xxx>)

Documento ou relatório governamental:

Nome da organização (p. ex., Ministério da Economia). (ano). Título do Relatório. Nº de publicação, se existe. (se for aplicável: Recuperado de <http://www.xx.xxx>)

Artigo de jornal online:

Autor, A. (dia, mês, ano). Título do artigo. Nome do jornal. Recuperado de <http://www.xx.xx>

RESENHAS
DE LIVROS

As resenhas devem ser de livros que não tenham mais de um ano desde o seu lançamento. O cabeçalho deve indicar: Título da obra, autor ou coordenadores/compiladores; Editora, Cidade, número de páginas, ISBN, e nome e sobrenome do autor. A extensão deverá ser de ser no máximo desde 3000 até 6.000 caracteres, e ser submetidas num arquivo em formato DOC, DOCX, RTF; tamanho A 4; espaço 1,5; fonte Times New Roman 12, sem justificar. As referências são colocadas no corpo do texto, entre parênteses (não como nota de rodapé), indicando o número de página(s) onde o fragmento citado se encontra. Ex: (p. 75). Referências a outros textos não devem ser incluídas.

TESE

São recebidos relatórios de dissertações de mestrado ou teses de doutorado no campo de Estado e Políticas Públicas que não tenham mais de um ano desde a sua defesa. A extensão desta comunicação deve ser entre 3.500 e 6.500 caracteres. O cabeçalho deve indicar: Título da tese, autor, diretor, instituição e grau para o qual foi submetida. O formato do arquivo deve ser DOC, DOCX, RTF; tamanho da página A 4; espaço 1,5; fonte Times New Roman 12, sem justificar.

AGENDA

24-26
A G O S T OXV INTERNATIONAL CONFERENCE ON
PUBLIC POLICY AND MANAGEMENT Centre for Public Policy Bangalore, INDIA13-16
O C T U B R E
O C T U B R OII CONGRESO NACIONAL D ESTUDIOS DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA AAEAP Asociación Argentina de Estudios de
la Administración Pública (AAEAP) Virtual3-4
DICIEMBRE
DEZEMBRO2020 WINTER GLOBAL PUBLIC
POLICY AND ADMINISTRATION
SYMPOSIUM University of Riverside Los Ángeles, ESTADOS UNIDOS8-11
DICIEMBRE
DEZEMBRO

VIII CONGRESO AMECIP

 Asociación Mexicana de Ciencias Políticas Guadalajara, MÉXICO

REPROGRAMADO


2020

M A Y O
M A I O

XVI CONFERENCIA ANUAL RED INPAE

 Red Inpae Mendoza, ARGENTINA

REPROGRAMADO

J U L I O
J U L H O26TH IPSA WORLD CONGRESS OF
POLITICAL SCIENCE IPSA Lisboa, PORTUGAL

REPROGRAMADO

2021

30-2
JUNIO JULIO
JUNHO JULHO5TH INTERNATIONAL CONFERENCE
ON PUBLIC POLICY International Public Policy Association (IPPA) Barcelona, ESPAÑA/ESPANHA23-26
A G O S T OXIV CONGRESO NACIONAL Y VII
INTERNACIONAL SOBRE DEMOCRACIA Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales -Universidad Nacional de Rosario Rosario, ARGENTINA

REPROGRAMADO

Políticas Públicas

HORIZONTES LATINOAMERICANOS

Políticas Públicas. Horizontes Latinoamericanos® (ISSN 2683-8850) es una publicación del Grupo de Investigación en Políticas Públicas Comparadas de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP).

